UN ANÁLISIS DE LA AYUDA ALIMENTARIA

CÓMO FUNCIONAN LOS BANCOS DE ALIMENTOS

UNA SEGURIDAD SOCIAL DE LA ALIMENTACIÓN

revista
SOBERANÍA ALIMENTARIA
BIODIVERSIDAD y culturas

NÚM.40
PRIMAVERA 2021

La revista es un espacio colectivo integrado por:

- Amigos de la Tierra
- Campo Adentro
- Cátedra de Agroecología
  Universidad de Vic
- Cátedra Tierra Ciudadana
  Universitat Politècnica de València
- CERAI
- COCEDER
- Colectivo Lantxurda Taldea
- Asociación El Colletero
- Commonspolis
- Ecocentral
- Ecologistas en Acción
- Entrepueblos
- Extiercol
- La Fàbrica, SCCL
- Fundación Entretantos
- Garúa
- GRAIN
- Grupo de Investigación en Agricultura, Ganadería y Alimentación en la Globalización (ARAG-UAB)
  Universitat Autònoma de Barcelona
- Grupo de Investigación en Economía Ecolóxica, Agroecoloxía e Historia.
  Universidade de Vigo
- Grupo de Estudios Juan Díaz del Moral
- Justicia Alimentaria Global
- Iniciativa Comunales
- Lonxanet
- La Magrana Vallesana
- Landare
- Menjadors ecològics
- Mundubat
- Observatori de l'Alimentació (ODELA). Universitat de Barcelona
- Observatorio para una Cultura del Territorio
- OSALA
- Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià
- Postgrau de Dinamització Local Agroecològica
  Universitat Autònoma de Barcelona
- Raiels SCCL
- Red Agroecológica de Lavapiés
- Red de Huertos Urbanos de Madrid
- Red de Semillas
- Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras
- Sindicato Labrego Galego
- Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)
- Terra Franca
- Universidad Rural Paulo Freire del Cerrato
- Varagaña

Si quieres que tu colectivo se sume, contáctanos.

PORTADA

Alejandro Ouro (Lugo, 1990) es un ilustrador y diseñador gráfico gallego cuyas acuarelas se caracterizan por un fuerte carácter simbólico e introspectivo, con influencias del surrealismo, la música y el mundo del cómic. Estudió Bellas Artes en la luminosa Salamanca y cursó un Erasmus en la nebulosa Münster (Alemania), donde se vio influenciado por el expresionismo y el diseño alemán. Ha participado en varias exposiciones, entre las que destaca la celebrada en Gütersloh (Alemania) tras una residencia artística. Su obra también ha sido seleccionada en varios concursos, como el certamen Imaxinando Cantares Gallegos, donde ilustró dos poemas de la intimista obra de Rosalía de Castro, o en la categoría Acuarela Emergente del concurso Iberart. Actualmente, reside en su boscosa región natal, donde combina encargos de diseño e ilustración con sus proyectos personales.

www.alejandrouro.com

AGRADECIMIENTOS

Además de a las personas que han contribuido con contenidos específicos ya mencionadas en las autorías, en los testimonios y en las fuentes, queremos agradecer a quienes nos han ayudado a hacer posible este número sugiriendo contenidos, contrastando información, facilitándonos contactos o simplemente ayudándonos a aterrizarla tal y como ha quedado: Madrid Agroecológico, Maria Foncillas, Paula Timoneda, Isabel Vara, Guille Jové, Traficantes de Sueños, Jordi Gascón, Marina Monsonís, Pueblos en Movimiento, Alberto Acosta, África Jiménez Ruiz y Eva Ortega Laina.

ESTA PUBLICACIÓN HA CONTADO CON EL APOYO FINANCIERO DE:

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG
OFICINA DE ENLACE MADRID

Fundación Rosa Luxemburgo
Oficina de enlace de Madrid

Os invitamos a que os comuniquéis con el equipo redactor (info@soberaniaalimentaria.info) y nos enviéis vuestras experiencias, sugerencias y comentarios así como aportaciones gráficas para próximos números. Los artículos son responsabilidad de quienes los firman. El material aquí recogido puede ser divulgado libremente, aunque agradeceríamos que citarais la fuente.

El contenido es responsabilidad exclusiva de quienes firman los textos y no refleja necesariamente la opinión de las entidades financiadoras

revista SOBERANÍA ALIMENTARIA BIODIVERSIDAD y culturas

NÚM.40 # PRIMAVERA 2021

Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas es una publicación para el Estado español de información, debate y reflexión sobre temáticas rurales bajo una óptica política de soberanía alimentaria. Un instrumento de pensamiento crítico hecho por las manos y para las manos de las gentes que integran los movimientos que defienden un mundo rural vivo.

COMITÉ EDITORIAL
Paul Nicholson
Jerónimo Aguado Martínez
Henk Hobbelink
Belén Verdugo Martín
Marta G. Rivera Ferre
Fernando Fernández Such
Carlos Vicente
Blanca Ruibal
Clara Griera
Mariola Olcina
Leticia Toledo

EDITA
El Pa Sencer SCCL:
Patricia Dopazo
Gustavo Duch
Carles Soler
Tomàs de los Santos

CORRECCIÓN Y WEB
Eva CM

ARTE Y MAQUETACIÓN
www.mareavacia.com

DIRECCIÓN POSTAL
c/ Girona 25, principal
08010 Barcelona

WWW.SOBERANIAALIMENTARIA.INFO
INFO@SOBERANIAALIMENTARIA.INFO

revistasoberaniaalimentaria
@revistaSABC
RevistaSoberaniaAlimentaria
revistasoberaniaalimentaria

Depósito Legal B-13957-2010
ISSN 2013-7567

Escucha el podcast especial del programa *Toma la Tierra* de *Suena Radio* sobre este número de la revista:

EDITORIAL

Un análisis de la ayuda alimentaria 4

AMASANDO LA REALIDAD

¿Cómo funciona la ayuda alimentaria?
Revista SABC 6
La dieta de los bancos de alimentos
Miguel Jara 11
Colapsadas, excluidas y con hambre de derechos
Isa Álvarez Vispo, Ruth L. Herrero y Lucía Shaw 13
Sistemas alimentarios locales frente a la emergencia alimentaria
Andrés Muñoz Rico 17
Conversatorio: «El pálpito de la población y la respuesta rápida están en manos de los grupos informales»
Revista SABC 21
Imaginarios 'rururbanos' para la transición ecosocial
LaFundició 25

DE UN VISTAZO Y MUCHAS ARISTAS

Experiencias transformadoras de ayuda alimentaria 29
Desaparición de la ayuda alimentaria
Daniel Montero Galán 30

EN PIE DE ESPIGA

El futuro de la alimentación es la democracia
Stéphanie Chiron y Patricia Dopazo 34
Fábricas de carne y mares de soja
Revista SABC 39

VISITAS DE CAMPO

Entrevista a Richard Intriago: «Se escuchó en todo el Ecuador que los campesinos han salvado el país»
Revista SABC 43
Los grupos de consumo ante la crisis de la COVID-19
Serlinda Vigara Mas y Álvaro Monsó Gil 47

PALABRA DE CAMPO

Las políticas de lo común resurgen y resisten
Laura Arroyo 51
La fuente. Un lugar de encuentro para pobladoras 53
Castilla: Territorio para el éxodo
Abrigaño 54

Ilustración: Alejandro Ouro

Un análisis de la ayuda alimentaria

¿Puede tener algo malo dar comida a quien la necesita? Para intentar contestar podemos seguir haciendo preguntas: ¿Quién la da? ¿Qué comida? ¿Por qué la necesita?

La pandemia ha conseguido que aumenten en más de 600.000 las personas que acuden a los bancos de alimentos, lo que ha hecho que se hable del tema más que nunca. Hemos visto en los medios de comunicación cómo se han reproducido las iniciativas ciudadanas que han atendido esta necesidad, responsabilizándose del reparto en sus barrios o bien consiguiendo comida por su cuenta, por ejemplo, mediante la recaudación de fondos. Hasta entonces, el circuito de la ayuda alimentaria estaba limitado a entidades muy concretas, casi todas de ámbito religioso y asistencialista, pero el desborde a la sociedad de civil no ha hecho que el debate social supere los límites acostumbrados. El público ajeno a esta problemática suele ver con compasión a quien recibe y con admiración y alivio a quien da.

Sin embargo, la propia Secretaría de Estado y Asuntos Sociales, en un documento de 2019, menciona la poca adecuación a las necesidades de este sistema de ayuda, su carácter estigmatizador e incluso su contribución al despilfarro alimentario.

La mirada de la soberanía alimentaria sobre este tema ofrece un catálogo muy amplio de aristas que hemos intentado reflejar en este número. Partimos de que la ayuda alimentaria se canaliza por los mecanismos del sistema alimentario capitalista, por tanto, tampoco con un objetivo como este ha sido capaz de situar la *alimentación* de la población en el centro. La conclusión sigue siendo que ganan las grandes empresas. Vemos también cómo se despoja a quienes necesitan este apoyo de su derecho a decidir qué comer; el Estado lo piensa por ellas. Conviene aquí ser muy precisos y diferenciar comida de alimentos. Saciar el hambre no tiene por qué ser lo mismo que alimentar.

Pero quizá la riqueza de este debate se encuentra en superar los parches, en pensar más allá del cambio de unas empresas por otras o unos lotes industriales por otros agroecológicos. Se trata de analizar las causas que sostienen esta precariedad social, quitarnos el velo de la pandemia, y relacionarlas con la propia precariedad de las personas que trabajan en el sector primario y con el abandono de los pueblos. Se trata, también, de trascender el papel de los estados y organizarse desde abajo, como ha hecho la sociedad ecuatoriana liderada por el campesinado, sacudiendo el tablero de su sistema político y mediático. Y se trata, por qué no, de pensar sin las ataduras de lo pragmático, de imaginar una realidad diferente y trazar las rutas que pueden llevarnos allí.

Revista SABC

¿Cómo funciona la ayuda alimentaria?

En situaciones de emergencia, se activan los mecanismos de ayuda alimentaria. Recientemente se han visibilizado más que nunca a causa del confinamiento sanitario y la crisis económica, pero ¿cómo funcionan estos fondos? ¿Qué alimentos se compran y a qué empresas? ¿Cómo llegan a las familias?

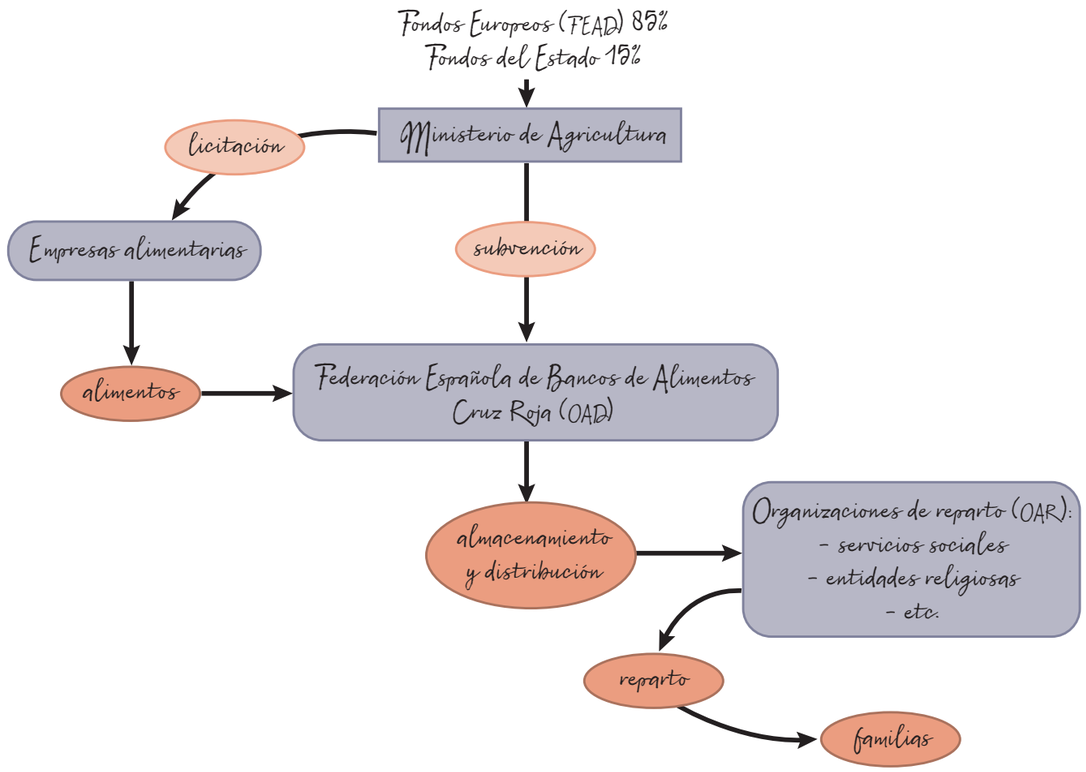
En el año 2015 publicamos el artículo «Banco de Alimentos. ¿Excedentes alimentarios para combatir la malnutrición?», en el que Xavier Montagut afirmaba que la partida más importante que reciben los Bancos de Alimentos procede de la Unión Europea y la gestiona el Ministerio de Agricultura. Con ella se compran alimentos calóricos fáciles de almacenar y transportar, con largos plazos de conservación y baratos. También explicaba que estos fondos solo llegan a las grandes empresas que optan a la subasta del Ministerio de Agricultura.

La ayuda alimentaria estatal se organiza a través del Programa de Ayuda Alimentaria para las personas más desfavorecidas, cofinanciado en el 85% por la Unión Europea (Fondo de Ayuda Europea para los Más Desfavorecidos - FEAD) y en el 15% por la Administración General del Estado. En 2020 estuvo dotado con un total de 80 millones de euros. Comprende la adquisición de alimentos, el suministro a los centros de almacenamiento y la distribución a las organizaciones asociadas de distribución (OAD), que los hacen llegar a las organizaciones asociadas de reparto autorizadas (OAR) para que, a su vez, los entreguen gratuitamente a las «personas más desfavorecidas» (concepto que utiliza la Administración). Es decir, participan cuatro actores: la Administración del Estado que gestiona los fondos, hasta ahora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; las empresas agroalimentarias que suministran los alimentos; las organizaciones responsables de la distribución de los alimentos (OAD) y las organizaciones de reparto (OAR). Al tratarse de fondos públicos, es obligatorio que tanto la compra de alimentos como su distribución y reparto estén regulados.

El primer paso: adquirir los alimentos

Si tomamos los datos del pasado 2020, llama la atención la lista de alimentos que la Administración ha decidido que se deben comprar para satisfacer las necesidades alimentarias de la población vulnerabilizada: aceite de oliva, alubia cocida, arroz blanco, batidos de chocolate, conserva de atún, conserva de carne (magro de cerdo), conserva de sardina, fruta en conserva en almíbar ligero, galletas, leche entera UHT, macarrones, macedonia de verduras en conserva, tarritos infantiles de fruta y de pollo, y tomate frito en conserva. ¿Son los mejores ingredientes para una dieta diaria suficiente, sana y nutritiva? Seguramente solo se ha buscado satisfacer la primera de las tres variables: «llenar las tripas».

El circuito de la ayuda alimentaria en el Estado español



Para adquirir los macarrones o las conservas de sardina que se ha calculado que se necesitan, el proceso abre una licitación para que las empresas interesadas puedan presentar su oferta. Entre los requisitos: ser empresas españolas o establecidas en la Unión Europea que fabriquen y comercialicen el alimento y tener capacidad de suministro a los almacenes que las OAD tienen en todas las provincias. Si tenemos en cuenta que se trata de aportar y distribuir 1200 toneladas de alubias cocidas o 34 millones de litros de leche entera, esta licitación solo está al alcance de grandes empresas.

A esto hay que añadir que el criterio que prevalece a la hora de seleccionar una oferta u otra es el del precio más barato, por tanto, no solo se primará empresas muy grandes, sino también modelos productivos industrializados que minimicen costes económicos en toda la cadena; es decir, costes baratos que se externalizan a la sociedad y al medio ambiente. Es fácil concluir que este esquema, cien por cien capitalista, fortalece el sistema alimentario que está detrás de problemas como la crisis climática, la desaparición del campesinado y la despoblación rural o la pérdida de biodiversidad y de fertilidad de la tierra.

Por ejemplo, si observamos la tabla de las empresas suministradoras de alimentos de 2020, cabría preguntarse: ¿no llegarán esas 3800 toneladas de atún de la pesca industrial que en mares africanos impide el acceso a las flotas artesanales locales como el caso de Somalia? Lo mismo nos preguntaríamos en el caso de las conservas de sardinas, ya que, según el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, una parte importante de las que consumimos llegan a nuestras casas procedentes del Sáhara ocupado, aprovechando los acuerdos de pesca entre Marruecos y la Unión Europea.

Aún más, si en lugar de adquirir las más de 3500 toneladas de alubias solo a partir de dos empresas, se primara la compra de legumbres variadas del pequeño campesinado que trabaja cuidando la tierra, ¿qué efecto tendría

La asociación Fresnecuida es un ejemplo de organización de reparto de ayuda alimentaria. Foto: Adriana Mateos

> Este esquema, cien por cien capitalista, fortalece el sistema alimentario que está detrás de la crisis climática o la desaparición del campesinado.

esa compra de más de 2,5 millones de euros?, ¿cuántas fincas se revitalizarían, cuántos puestos de trabajo se fortalecerían o crearían, cuántos costes para sanar la tierra nos ahorraríamos? Es muy grave que partidas de este volumen económico, gestionadas por el propio Ministerio de Agricultura, no reviertan en la economía local y el cuidado del territorio.

El reparto

Encontramos un esquema monopólico similar en el proceso de distribución de estos alimentos. Anualmente se convocan subvenciones para sufragar los gastos de gestión, de transporte y almacenamiento por parte de las organizaciones asociadas de distribución (OAD) responsables de hacer llegar los alimentos a las organizaciones de reparto (OAR). Para que las entidades puedan acceder a estas subvenciones, entre otros requisitos, deben ser de ámbito nacional y disponer de la estructura y capacidad administrativa, operativa y financiera suficiente para hacer este trabajo y su seguimiento. En concreto, se valora que tengan capacidad de distribuir, anualmente, al menos 14 millones de kilos de alimentos y que dispongan de una red territorial de almacenes en cada una de las provincias.

En estas condiciones y después de muchos años consolidando un modelo, desde 2011 solo hay dos OAD designadas: la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y la Cruz Roja Española. Ambas han recibido para ello 2 millones de euros de dinero público en 2020.

Las OAR, como hemos mencionado más arriba, son las responsables de entregar los alimentos a las familias, bien en forma de lotes de productos o de consumo directo (mediante la elaboración de platos preparados que se consumen en sus instalaciones). Deben estar legalmente constituidas y atender a un mínimo de 20 personas.

Entre las OAR autorizadas, nos encontramos mayoritariamente servicios sociales de la Administración, entidades religiosas católicas y de otras confesiones y asociaciones, fundaciones o asambleas y grupos locales de la misma Cruz Roja Española y de la FESBAL.

En este circuito encontramos pocas organizaciones comunitarias de base y autogestionadas, en parte por su propia naturaleza: hacer de la ayuda alimentaria un ejercicio de solidaridad y empoderamiento, no una simple entrega caritativa de alimentos. Además, este proceso implica cierta estigmatización y fiscalización, ya que las OAR están obligadas a llevar un registro del número total de personas que reciben la ayuda con nombres, documento de identidad y fecha de nacimiento, una información que muchos colectivos sociales se resisten a proporcionar para proteger a las familias receptoras.

FEAD, una reforma necesaria

El propio Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social reconoce que la ayuda alimentaria procedente de Europa históricamente ha estado asociada a la Política Agraria Común (PAC) y se ha basado en canalizar excedentes agrícolas hacia los colectivos vulnerables. A partir del 2014 esta política se modificó con la creación de los fondos FEAD; pero aunque la Unión Europea quiso darles una nueva orientación y abrió la posibilidad de que cada país reorganizara su sistema de ayuda alimentaria, el Estado español sigue reproduciendo la lógica de «gestionar excedentes» sin más, mientras que otros países europeos han desarrollado mecanismos muy diferentes.

La Secretaria de Estado de Servicios Sociales, en algunos documentos de reflexión, explica como este mecanismo centralizado de adquisición, compra, almacenamiento y distribución en manos del Ministerio de Agricultura es muy poco eficiente desde el punto de vista económico. Pero también detecta que su lógica de intervención es esencialmente asistencialista y que no contribuye a potenciar las capacidades de quienes se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social; afirma que el sistema de grandes compras de lotes no se adecua a las necesidades reales y provoca un importante despilfarro alimentario y, por último, algo evidente: con este sistema los lotes «no pueden incluir productos frescos, lo cual dificulta el acceso a frutas y verduras, así como a lácteos, carnes o pescados, por parte de los beneficiarios de este programa».

Actualmente, se está negociando la aprobación del nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027, que definirá las líneas generales del presupuesto comunitario para ese período y la naturaleza y el funcionamiento del nuevo Fondo Social Europeo (FSE). Es el momento de repensar el FEAD e incidir en que sea un programa más social. En principio, parece un escenario favorable. La Administración española quiere orientar estos fondos en dos ejes prioritarios: la lucha contra la pobreza infantil y la implantación de un programa de tarjetas de débito prepago a través de las cuales las personas vulnerabilizadas puedan acceder a una serie de bienes de primera necesidad según sus propias prioridades. Debemos poner atención para ver cómo evoluciona esta declaración de intenciones y preguntarnos qué tipo de alimentos se van a promover y qué papel van a tener los colectivos vulnerables en la toma de decisiones.

Una compra pública que favorece a la industria

En un horizonte de crisis económica y recepción de fondos europeos condicionados, parece que las situaciones de emergencia alimentaria cada vez serán más frecuentes. Es necesario abordar en toda su complejidad cómo garantizar los cuidados a las personas o familias que se encuentran en situación de exclusión y no tienen acceso a la alimentación, vivienda o trabajo. Y también es necesario y urgente romper con la ayuda asistencialista que se promueve en este programa de ayuda alimentaria y entender esta intervención social como una magnífica palanca en favor de la transformación del sistema alimentario capitalista. Debemos tener en cuenta que en toda la cadena de la ayuda alimentaria se invisibilizan los dos actores principales: la producción de alimentos y las personas excluidas. Y, al contrario, se beneficia a las grandes empresas agroalimentarias, con la compra de excedentes, y se da protagonismo y poder de decisión a las distribuidoras de «caridad».

Como vemos en otros artículos en estas mismas páginas, están surgiendo muchas iniciativas con las que la sociedad civil, especialmente los sectores de los colectivos agroecológicos, demuestran que se puede reorientar el modelo. Es momento, por un lado, de dar protagonismo a las personas excluidas para que formen parte de la toma de decisiones en los programas de derecho a la alimentación. Por otro lado, es necesario abrir todo este proceso de compra pública a los proyectos productivos de pequeña escala para garantizar que la cesta esté conformada por alimentos frescos, de temporada y de producción local en lugar de alimentos enlatados sin origen determinado.

Revista SABC

ALIMENTO	MONTO (euros)	EMPRESA	Municipo	Provincia	VOLUMEN (kg o l)	PRECIO	MARCAS
Aceite de oliva	14.758.000	OLEO MASÍA SA	Dos Hermanas	Sevilla	7.611.210	1,94 €	LA MASIA
Alubia cocida	820.000	ACICO SA	Cortes	Navarra	1.195.850	0,69 €	EL CANO
Alubia cocida	1.627.500	LEGUMBRES PENELAS SL	Villareja de Órbigo	León	2.360.623	0,69 €	PENELAS, ÓRBIGO, LA NORIA
Arroz blanco	1.380.000	ARROCES Y CEREALES SAU- ARCESA	Oliva	València	2.136.228	0,65 €	SIGNO, LA PERDIZ, AMBRA, CURTIRISO
Arroz blanco	1.380.000	NOVARROZ PRODUTOS ALIMENTARES SA	Oliveira de Azemeis	Portugal	2.126.004	0,65 €	LOURO, NOVARROZ
Batido chocolate	2.150.000	LACTALIS FOOD SERVICE IBERIA SA	Madrid	Madrid	2.724.969	0,79 €	CHOLECK, PULEVA, NESQUIK, RAM
Batido chocolate	2.150.000	Lactogal, Produtos Alimentares SA	Oporto	Portugal	2.792.208	0,77 €	MIMOSA
Conserva atún	12.750.000	FRINSA DEL NOROESTE SA	Ribeira	La Coruña	3.873.384	3,29 €	FRINSA
Conserva carne	4.500.000	INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS DEL LOURO SA	O Porriño	Pontevedra	1.386.555	3,25 €	Pertenece a COREN
Conserva sardina	5.381.000	CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA SL	O'Grove	Pontevedra	1.660.376	3,24 €	ISABEL
Fruta en conserva en almíbar ligero	4.700.000	PRODROMOS PAVLIDIS SA	Giannitsa	Grecia	5.193.539	0,90 €	PAVLIDES
Galletas	2.500.000	GALLETAS SIRO SAU	Venta de Baños	Palencia	3.875.969	0,64 €	SIRO
Leche entera	16.338.900	Lactogal, Produtos Alimentares SA	Oporto	Portugal	34.912.180	0,47 €	
Macarrones	1.736.000	SIRO VENTA DE BAÑOS SAU	Venta de Baños	Palencia	3.352.646	0,52 €	FAMILIA, ARDILLA
Macedonia verduras conserva	4.079.000	ACICO SA	Cortes	Navarra	5.650.086	0,72 €	EL CANO
Tarritas infantiles pollo	182.300	HERO ESPAÑA SA	Alcantarilla	Murcia	124.897	1,46 €	HERO
Tarritas infantiles fruta	182.300	HERO ESPAÑA SA	Alcantarilla	Murcia	112.977	1,61 €	HERO
Tomate frito en conserva	3.385.000	CARNES Y VEGETALES SL	Mérida	Badajoz	7.358.696	0,46 €	APIS, FRUCO
TOTAL	**80.000.000**						

Fuente: Elaboración propia a partir de la licitación Suministro de alimentos en el marco del Programa de Ayuda a las Personas más Desfavorecidas 2020 PO FEAD 2014-2020

LA DIETA DE LOS BANCOS DE ALIMENTOS

Miguel Jara

MUCHA AZÚCAR Y NADA DE VERDURA FRESCA

La ayuda alimentaria actual está compuesta por alimentos industriales. Desde un punto de vista nutricional, este tipo de alimentación puede generar malnutrición, «hambre oculta» e incluso diferentes enfermedades.

El sistema actual de ayuda alimentaria está basado en los llamados bancos de alimentos, en los que prima el objetivo de «llenar barrigas» para salvar una situación concreta de riesgo de exclusión alimentaria (por no escribir hambre), sin preocuparse de algo crucial: hay que alimentar debidamente a esta población.

Por poner un ejemplo, la dieta para una persona durante un mes en un banco de alimentos de Madrid, se compone de 2 kg de harina, 3 de arroz, 3 de pasta, 3 de legumbres, 2 de azúcar, 2 l de aceite, 2 docenas de huevos, 10 l de leche entera, 4 botes de 400 g de tomate frito, 4 precocinados de carne de 0,5 kg cada uno, 2 paquetes de galletas María de 800 g, 2 de cacao de 400 g y 2 kg de alimentos infantiles.

Es decir, abundan los procesados y el azúcar, y no hay verduras frescas, que han de ser la base de nuestra alimentación y, curiosamente, suele ser lo más barato de una cesta de la compra. Esto ocurre en casi todos los bancos de alimentos. Si bien hay alimentos correctamente ofertados, como el arroz, las legumbres, el aceite o los huevos; destaca un alto consumo de azúcar. La llevan el tomate frito, muchos precocinados de carne, esos dos kilogramos de azúcar refinada que se antojan excesivos para un solo mes, las galletas tipo María, el cacao —se entiende que es el típico en polvo— y los alimentos infantiles.

El consumo excesivo de azúcar provoca daños conocidos. El azúcar se ha convertido durante los últimos años en uno de los demonios alimentarios. El objetivo de los fabricantes y las marcas era reducir un 30 % los ingredientes «prohibidos» (azúcar, sal y grasas) en miles de alimentos procesados antes de 2020. No hay duda de que el aumento de enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o la obesidad está relacionado con determinados hábitos alimenticios insanos, como la ingesta de azúcar.

Al comienzo de la década de 1960, los primeros análisis científicos ya responsabilizaban tanto a los azúcares añadidos como a las grasas saturadas de las elevadas tasas de infartos y otras enfermedades cardíacas. El estudio que incrustaba la mentira en la comunidad científica se publicó en 1965 en el *New England Journal of Medicine*. Hasta hace poco y por presiones de las industrias relacionadas con el azúcar, la mayor parte de las guías dietéticas se han centrado solo en la limitación de las grasas y el colesterol (esas que abundan en los alimentos precocinados de carne), restando importancia al elevado consumo de hidratos de carbono y azúcares añadidos, que tanto ha contribuido a la epidemia de obesidad y diabetes que hay en numerosos países occidentales.

También hay abundancia de trigo en la dieta propuesta por los citados bancos. La población diagnosticada de celiaquía está en torno al 2 %, es decir, medio millón de personas. Pero hay muchas que no están diagnosticadas o que no saben que son intolerantes al gluten. Más del 90 % del trigo producido es el denominado harinero, perteneciente a la especie *Triticum aestivum*. El trigo moderno es el resultado de la selección e hibridación efectuadas durante años para conseguir variedades con alto contenido en gluten por sus cualidades viscoelásticas y adhesivas, demandadas por la industria alimentaria.

Una de las claves para que el gluten provoque enfermedades es la incapacidad del ser humano para digerirlo al completo. Los fragmentos

Algunas organizaciones de base completan el lote de los bancos de alimentos con productos frescos. Foto: Adriana Mateos

proteicos sin digerir son potencialmente tóxicos, ya que pueden ser detectados por el sistema inmunitario y desencadenar una reacción adversa.

En esa dieta tipo encontramos dos litros de leche. No es mucha cantidad, pero hay que tener en cuenta que hay muchas personas con sensibilidad, intolerancia o alergia a la lactosa de la leche. En España, entre 13 y 22 millones de personas. La leche fresca ocasiona menos alergia y asma infantil que la procesada de tetrabrik. Hay estudios que concluyen que el consumo de leche fresca de granja puede proteger contra el asma y la alergia.

Por último, cabe añadir un dato más sobre esos precocinados de carne y los alimentos infantiles (aunque en el listado no se especifica cuáles son). La diferencia entre comida y ultraprocesado es sustancial, los procesados son preparaciones industriales comestibles elaboradas a partir de sustancias derivadas de otros alimentos. Realmente no tienen ningún alimento completo, como explican algunos especialistas, sino largas listas de ingredientes. Y esos ingredientes suelen llevar un procesamiento previo como la hidrogenación o fritura de los aceites, la hidrólisis de las proteínas o la refinación y extrusión de harinas o cereales. En su etiquetado es frecuente leer materias primas refinadas (harina, azúcar, aceites vegetales, sal, proteína, etc.) y aditivos (conservantes, colorantes, edulcorantes, potenciadores del sabor, emulsionantes…). Poco sano, vaya.

En 2015, tras evaluar 700 trabajos científicos, un grupo de 22 expertos de 10 países diferentes decidieron elevar al grupo 1 de productos «cancerígenos para los humanos» a las llamadas carnes procesadas y cualquier derivado de la carne que haya sufrido una transformación industrial (como ocurre con jamones, lasañas preparadas, carnes envasadas o salchichas).[1]

Además, los alimentos ultraprocesados llevan mucha grasa. La grasa es el oro líquido de la industria, un ingrediente muy barato que resulta muy adictivo para el cerebro humano y que además ofrece muchas propiedades para fabricar cosas de comer. El inconveniente es que las grasas están detrás, como se ha mencionado, de la epidemia de enfermedades coronarias existente en los países más ricos.

Las dietas de la ayuda alimentaria ofrecen productos correctos, como legumbres, arroz, etc. Faltan, eso sí, las verduras frescas en abundancia, que son la clave de cualquier dieta sana. No sería difícil corregir ese error acudiendo a productores locales, cercanos a la población donde se reparte esa ayuda y llegar a acuerdos con ellos para aprovechar sus excedentes, por ejemplo.

Miguel Jara

1. OMS, Carcinogenicidad del consumo de carne roja y de la carne procesada, octubre de 2015.

Isa Álvarez Vispo, Ruth L. Herrero y Lucía Shaw

Colapsadas, excluidas y con hambre de derechos

Tanto quienes producen alimentos a pequeña escala como quienes no tienen capacidad para acceder al modelo de consumo hegemónico se han convertido en agentes periféricos cuando deberían ser el centro de un sistema que fuese sano y justo tanto para las personas como para el planeta.

Pasar hambre es un hecho que, hasta años recientes, parecía exclusivo de esos países llamados «del Sur», pretendiendo creer en el oasis del Norte y la narrativa del Estado del Bienestar. Hoy vemos como hay un Norte y un Sur en cada ciudad y como, dentro de los territorios, los centros y las periferias cada vez se alejan más. La globalización tuvo una cara visible que una gran parte de la sociedad compró, colocarnos en los mapas, integrarnos en un modelo que solo habíamos visto en las ficciones cinematográficas. Modos de consumo y de vida, marcas que sirven a la vez de faro consumista y de neones cegadores, que no dejan ver los pilares en los que se construyen, pilares de profunda desigualdad basados en centros y periferias. La globalización le puso el lazo a un modelo que venía desarrollándose desde principios del siglo XX, este *capitaloceno* que pretende mostrarse como hecho indiscutible y que impregna todos los ámbitos de nuestra vida, incluido, por supuesto, el alimentario.

De qué hablamos cuando hablamos de alimentación

Los llamados sistemas alimentarios han sufrido una profunda transformación en los últimos cincuenta años que ha conllevado una desconexión absoluta entre las personas que comemos y quienes trabajan a diario en la producción de alimentos. Esta desconexión es consecuencia, por una parte, del abandono del medio rural para migrar hacia las ciudades en busca de ese bienestar ansiado; por otra, de la instauración de un modelo de producción basado en el lucro de unos pocos, que, cada vez más, se ha ido alejando de modelos que miran la tierra y las necesidades reales, y por último, consecuencia de unos ritmos centrados en el ámbito productivo y el empleo que condicionan la distribución de los tiempos en el día a día.

Además, cuando hablamos de alimentación, hablamos de una actividad relacionada con lo doméstico y los cuidados, lo reproductivo, históricamente atribuida a las mujeres. Esta desigualdad, traducida hoy a que las mujeres se han incorporado al mercado productivo sin una redistribución de las tareas del ámbito reproductivo, las hace tener múltiples jornadas de trabajo al cabo del día. El tiempo del trabajo asalariado no es negociable, y menos dentro de una precariedad generalizada, por lo que les toca cuadrar las horas para las distintas tareas del trabajo reproductivo y cada vez el tiempo para cada tarea es menor, incluidas las relacionadas con la alimentación. El capitalismo ha ofrecido múltiples opciones para resolver esta cuestión, desde la creación de los

Recogida de alimentos en el comercio local del grupo Fresnecuida (Fresnedillas de la Oliva). Foto: Adriana Mateos

hipermercados en los setenta, hasta los productos ultraprocesados hoy en día. En ningún caso plantea un replanteamiento de los roles, ya que la desigualdad es un pilar básico para que sus cuentas cuadren.

En pocos años se ha pasado de las ollas a fuego lento al microondas y de comer alimentos a ingerir productos comestibles. Aparentemente, este proceso ha sido normalizado por la sociedad, aunque no de la misma forma en todos los contextos, ni en todos los géneros, ni en todas las clases. En algún sitio decían que el hambre tiene código postal y esto, que ya se hizo muy visible en la crisis de 2008, ha terminado de emerger con la crisis derivada de la COVID-19. En pocos años, las cestas de recogida de alimentos que hace quince años se destinaban «a África» han pasado a ser para nuestras vecinas más próximas y las colas del hambre son cada vez más largas, a la vez que las pequeñas empresas que producen alimento sano tienen muchas dificultades para encontrar una viabilidad a largo plazo.

¿Qué comen las que malcomen?

La Coordinación Baladre lleva años trabajando en la creación de herramientas desde los grupos que nos sabemos periféricos y que hemos visto en la construcción comunitaria nuestra principal fuerza. Convivimos en el día a día, tanto en el medio rural como en las periferias urbanas, con el drama de la exclusión social en sus facetas más duras. Convivimos con la explotación de personas migrantes sin derechos en las grandes

> En pocos años se ha pasado de las ollas a fuego lento al microondas y de comer alimentos a ingerir productos comestibles.

explotaciones agroalimentarias o en el ámbito urbano con las desahuciadas, las «sin techo», las precarizadas, desempleadas…; pero, cada vez más, también en poblaciones rurales. Estas situaciones nos han interpelado a poner en el debate del colapso capitalista la clave del derecho a la alimentación, tanto desde la perspectiva de quien produce como desde la de quienes acceden al alimento, entendiendo alimento, no como cualquier producto comestible.

El texto *¿Qué comen las que malcomen?* no es un trabajo de investigación, sino una puesta en común de nuestras situaciones y prácticas individuales y colectivas, como personas productoras precarizadas, como activistas en iniciativas alimentarias sostenidas por la comunidad y como personas precarias y empobrecidas.

Día de la Interhorticulturalidad en Abetxuko. Foto: Baladre

Como usuarias de modelos de asistencialismo alimentario, podemos decir que muchos de ellos apenas cuentan con elementos que dignifiquen la vida y la alimentación, y, además, generan dependencia y sumisión para quienes tienen que recurrir a ellos. A partir de ese conocimiento y de nuestras propias prácticas, elaboramos nuestra propuesta, identificando las claves para la transformación de este modelo desigual. No queremos asistencialismos, dependencias, estigmas o individualismo, queremos construir en colectivo la agroecología, la denuncia, la autogestión, la ruptura de polaridades, desde los cuidados y el feminismo.

En este sentido, para nosotras es fundamental mirar la alimentación desde una óptica feminista, incluyéndola no como un apéndice, sino como un pilar principal.

Asistencialismo alimentario

Este sistema, en lugar de ofrecer soluciones para un acceso al alimento con una perspectiva de derecho a la alimentación, fabrica fórmulas que benefician a las mismas corporaciones que provocan el hambre y que intensifican las desigualdades del propio modelo, buscando más los intereses de unas pocas que el acceso a alimentos sanos y saludables para todo el mundo. El asistencialismo supone considerar el alimento desde una perspectiva caritativa y no en clave de derecho, y desgraciadamente es la visión más generalizada en los espacios donde las personas en exclusión pueden llenar la despensa: la Fundación Banco de Alimentos, Cruz Roja o Cáritas, que consiguen los alimentos de excedentes a través de fondos de la UE o de donaciones privadas. Tanto estas instituciones como la Administración pública, a través de sus servicios sociales, que derivan a las personas sin recursos hacia estos «servicios alimentarios», distribuyen productos de grandes corporaciones, mediante licitaciones pensadas a gran escala y donde brillan por su ausencia los productos frescos y agroecológicos. Entonces, ¿qué se distribuye?, ¿alimento o productos comestibles?

Además, el tránsito por los diferentes modelos de asistencialismo alimentario nos devuelve que existe una brecha de género que se corresponde con una mayor conciencia de cuidados por parte de las mujeres, fruto de la división sexual del trabajo ya mencionada. Quienes hacen uso de los comedores sociales son mayoritariamente hombres, dado que los alimentos vienen elaborados y que, en buena parte de los casos, no tienen que alimentar a la prole. Sin embargo, en las colas de los bancos de alimentos, las usuarias de los bonos sociales o de las despensas solidarias son mayoritariamente mujeres. Esto sucede porque, si no concurren otras circunstancias, como la falta de vivienda o la pobreza energética, las mujeres prefieren elaborar su propio alimento y estirar los productos que recogen para que duren más

Del asistencialismo a la soberanía alimentaria

A lo largo de este proceso y de la publicación y difusión del texto ¿Qué comen las que malcomen?, *ya estamos viviendo algunas transformaciones. Es el caso de la cooperación entre Verddterra, un colectivo de Agricultura Sostenida por la Comunidad en Xàtiva (València) y Gent de la Consolació, un proyecto de reparto de comida, atención e información que da cobertura a más de 500 familias en exclusión. Algunas compañeras de Verddterra ya pagan, además de su caja de verdura fresca y de proximidad, otras dos más para personas que no cuenten con recursos; la idea es que esta práctica se extienda. En otros lugares están repensando proyectos, como las neveras solidarias o algunos reciclajes de alimentos, que ahora quieren replantear en clave de transición hacia otros modelos que realmente alimenten. Son casos concretos que se suman a despensas solidarias, bancos de alimentos alternativos o iniciativas como la de la interhorticulturalidad que se da en Abetxuko (Gasteiz) en torno a los huertos sociales, un espacio en el que personas de diferentes procedencias comparten huertos, no solo como un lugar en el que cultivar alimentos, sino también donde intercambiar saberes, culturas, semillas y construir comunidad. En definitiva, se trata de generar múltiples caminos que sumen hacia el acceso a alimentos y la construcción de la soberanía alimentaria.*

tiempo. Pero, sobre todo, porque en la inmensa mayoría de los casos, las mujeres no solo se encargan de su autoabastecimiento o autosubsistencia, sino también de los cuidados de criaturas o de personas dependientes, lo que supone que el acceso a la comida depende inevitablemente de ellas. Esto, además del trabajo que conlleva, implica una carga emocional fuerte, un sentimiento de culpa muy grande cuando no se responde a esta responsabilidad y, en la dimensión práctica, colocarse en último lugar en el reparto de la comida, por lo que, además de ser quienes alimentan, son a la vez las más desnutridas.

La Renta Básica de las Iguales (RBis)

A partir de aquí desarrollamos nuestra propuesta de una RBis como derecho individual, universal, incondicional, suficiente y comunitario, en el que cada persona por el hecho de existir pueda percibir una cantidad monetaria suficiente para cubrir sus necesidades materiales; suficiente como para que una parte de esa renta se destine a un fondo común que pueda satisfacer necesidades de manera colectiva. De ahí que vinculemos nuestra propuesta a la soberanía alimentaria, al derecho de todas las personas a decidir qué alimentos producir, cómo y, por supuesto, para acceder a ellos en condiciones de igualdad.

El sistema alimentario desigual que hemos descrito se basa en relaciones de dependencia, en el caso de las productoras, con el mercado hegemónico y, en el caso de las no productoras, con los canales de acceso a un tipo de comida que cada vez es menos alimento. La RBis es una herramienta que puede contribuir a romper con este modelo y a la construcción de nuevos modelos de relación social, pero entendemos que no puede caminar sola, de ahí que la vinculación a iniciativas comunitarias y con una óptica agroecológica nos parezca fundamental. De otra forma, podemos caer en prácticas e iniciativas asistenciales para quienes no pueden elegir lo que comen, o exclusivistas, para quienes tienen los recursos y las herramientas (políticas y económicas) para salir del circuito agroindustrial y acceder a una alimentación sana, sin que ello suponga romper con las desigualdades y precariedades de aquellas personas o colectivos que cultivan o cuidan de la elaboración de nuestros alimentos. A partir de todo esto, trabajamos en lo que llamamos los alimentos sostenidos por la comunidad, propuestas en las que nos responsabilicemos de forma colectiva de nuestra alimentación y que pueden traducirse en la práctica en muchas fórmulas, desde iniciativas de cocinas comunitarias hasta grupos de consumo con un compromiso colectivo, en los que se buscan fórmulas para que alimentarse no sea un lujo.

Isa Álvarez Vispo, Ruth L. Herrero y Lucía Shaw

Integrantes de la Coordinación Baladre y autoras, junto a Mari Fidalgo, del libro ¿Qué comen las que malcomen?

Andrés Muñoz Rico

Sistemas alimentarios locales frente a la EMERGENCIA ALIMENTARIA

Uno de los ámbitos más afectados por la pandemia en todo el mundo ha sido el alimentario. Las primeras medidas adoptadas, junto con el aislamiento domiciliario, consistieron en el cierre de mercados locales, las trabas al acceso a huertos y granjas, así como la prohibición de exportaciones por miedo a un desabastecimiento alimentario nacional. Los sistemas alimentarios locales demostraron en todas las latitudes ser los más resilientes.

A diferencia de lo que sucedía en el pasado, actualmente en la mayor parte de las ciudades y los países del mundo no se tienen reservas suficientes de alimento ante eventualidades. Los gobiernos han legislado para favorecer un sistema económico globalizado, que deja la provisión de alimentos en manos de grandes intereses comerciales, en detrimento de los sistemas alimentarios locales. Eso hace que buena parte de la comida que se consume llegue a los mercados nacionales con menos de una semana de antelación. Esta falta de planificación pública alimentaria a escala regional ha hecho que las barreras a la producción y comercialización locales de alimentos, así como el cierre de fronteras por la COVID-19, hayan puesto en grave riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria de muchas personas y comunidades.

Paradójicamente, y en paralelo, los intereses económicos que apuestan por aumentar aún más la globalización del sistema alimentario han intensificado su presión política. En concreto, la Unión Europea ha aprovechado que la atención mediática y social está puesta en la pandemia, para intentar acelerar la aprobación de nuevos acuerdos comerciales, como el de MERCOSUR, o la revisión de acuerdos, como el de Chile y México, que tendrán graves impactos en los sistemas alimentarios locales, además de contribuir a agravar la emergencia climática, la deforestación y la vulneración de derechos humanos.

Pandemia global en un mundo con hambre

Los impactos de la emergencia alimentaria en tiempos de la COVID-19 tienen una incidencia diferente según la zona geográfica, el género y la condición social. De acuerdo con la estimación más reciente de la FAO, antes de la pandemia casi 690 millones de personas, el 8,9% de la población mundial, sufrían «hambre crónica».[1] Las perspectivas económicas derivadas de la pandemia pueden haber añadido entre 83 y 132 millones a la población inicialmente estimada. Además, se calcula que dos mil millones de habitantes del planeta, el 25,9% de la población mundial, no tiene en la actualidad «acceso regular a alimentos nutritivos y suficientes». A ello habría que sumarle

1. La subalimentación o hambre crónica es la incapacidad de las personas para consumir alimentos suficientes para satisfacer las necesidades de energía alimentaria. Fuente: FAO.

las personas empobrecidas que no se pueden permitir «dietas saludables»,[2] y las estimaciones más prudentes indican que se trata de más de 3000 millones[3] de personas en todo el mundo.

A su vez, los efectos de la pandemia tienen especial incidencia en las mujeres. Las mujeres y las niñas son la mayoría de las productoras de alimentos y proveedoras de sus hogares; y, además, ocupan roles centrales como enfermeras, trabajadoras sociales y de cuidados, maestras, así como trabajadoras agrícolas y de la alimentación. Sin embargo, según denuncia el Grupo de Trabajo de Mujeres del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (CSM) de la ONU, han sido sistemáticamente ignoradas e invisibilizadas en la investigación y en las respuestas políticas a la crisis de la COVID-19.

Dados este contexto global y el alcance de la emergencia alimentaria, cabe preguntarse cuál está siendo el papel de la producción y comercialización local de alimentos para reducir los impactos negativos de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia. Para ello, podemos apoyarnos en algunas investigaciones que la FAO ha llevado a cabo durante el 2020.

La vulnerabilidad de las ciudades

La encuesta mundial de la FAO sobre la COVID-19 pone en evidencia que las restricciones en el uso del transporte público y en la venta de alimentos en espacios públicos como parques, plazas y calles han tenido un gran impacto en la accesibilidad local a los alimentos. Si se tiene en cuenta el tamaño de las ciudades y pueblos, se constata que los sistemas alimentarios de las aldeas (menos de 5000 habitantes) y los pueblos pequeños (entre 5000 y 25.000 habitantes) se vieron menos afectados que las ciudades (más de 500.000 habitantes). Ello es debido a las medidas de restricción más severas y a las cadenas de suministro de alimentos más largas en las ciudades más grandes.

La accesibilidad de los alimentos también se ha visto muy afectada por el cierre obligatorio de escuelas, restaurantes, comedores y establecimientos de venta de alimentos en la calle, que ha alterado las pautas de alimentación de millones de personas vulnerables en todo el mundo, en particular niños y niñas. Además, las medidas restrictivas a la movilidad, a las reuniones de personas y a la importación de alimentos para contener la propagación del virus han generado una amplia gama de efectos a corto y largo plazo en la producción y el suministro que afectan principalmente a la agricultura de pequeña escala. Se teme el colapso de muchas de estas fincas, con el consiguiente aumento de pobreza generalizada entre el campesinado más vulnerable.

> Según la FAO, los efectos observados de la COVID-19 ponen de relieve la necesidad de asegurar y fortalecer las interrelaciones entre las zonas urbanas y rurales en tiempos de crisis.

Es significativo que las medidas restrictivas a la movilidad humana adoptadas han dado lugar, a su vez, a una escasez de mano de obra y a la precariedad de las condiciones laborales en actividades vinculadas con la agricultura y la alimentación. Esta situación ha causado una enorme cantidad de desperdicio alimentario, pérdidas económicas en la agricultura y la vulneración de los derechos laborales y sanitarios en muchos países. También el acceso limitado al suministro de semillas ha afectado a la capacidad de las productoras para plantar y se prevé una escasez de alimentos y un aumento de los precios en los mercados locales. Esto restringirá aún más el acceso a los alimentos de las personas vulnerables y provocará inseguridad alimentaria y nutricional. La Vía Campesina afirma que ahora más que nunca se deben poner en práctica y defender los principios de soberanía alimentaria, a través de la promoción de las semillas nativas y la construcción de sistemas alimentarios locales, diversos y agroecológicos. Para lograrlo exigen reformas agrarias reales y la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas campesinas (UNDROP).

La producción local de temporada asegura la resiliencia de los sistemas alimentarios. Foto: Alterbanc

Una transformación radical y urgente

Las desigualdades estructurales preexistentes a la pandemia determinan en muchos países cuáles serán los colectivos más afectados y cuáles se aprovecharán de la crisis de la COVID-19. Para el Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (CSM) de la ONU no son aceptables las escandalosas desigualdades de renta y riqueza a nivel global y dentro de los países, en un contexto en el que cientos de millones de personas se están quedando sin trabajo y en el que países de bajos ingresos y con déficit alimentario se enfrentan a catástrofes económicas, sociales y políticas. Destaca las desigualdades que conducen a la discriminación cotidiana y estructural de las mujeres, pueblos indígenas, minorías étnicas, personas trabajadoras, campesinas, migrantes, sin tierra, sin techo, desempleadas, trabajadoras informales y población empobrecida de las ciudades, cuya situación debe abordarse ahora como una cuestión de emergencia mundial.

Según la FAO, los efectos observados de la COVID-19 ponen de relieve la necesidad de asegurar y fortalecer las interrelaciones entre las zonas urbanas y rurales en tiempos de crisis y, además, subrayan la importancia de acortar las cadenas de suministro e incorporar la producción de alimentos en las zonas urbanas y periurbanas. Ello parece cada vez más necesario en un contexto global en el que la población que vive en las ciudades sigue en aumento, representando en la actualidad el 55% del total y con la perspectiva, según la ONU, de alcanzar el 68% para 2050.

2. La calidad de la dieta comprende cuatro claves: la variedad, la idoneidad, la moderación y el equilibrio general. Según la OMS, una dieta saludable protege de la malnutrición en todas sus formas, así como de enfermedades no transmisibles, como, por ejemplo, la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer.

3. La FAO estima que, de media, las dietas saludables son cinco veces más costosas que las dietas que solo satisfacen las necesidades de energía alimentaria mediante alimentos basados en cereales y almidón.

Alimentación local frente a la pandemia

Según la encuesta mundial de la FAO sobre la COVID-19, cabe destacar algunos ejemplos internacionales paradigmáticos sobre cómo afrontar adecuadamente el reto y las potencialidades de los sistemas alimentarios locales frente a la pandemia. Destacan las siguientes experiencias:

• Antananarivo (Madagascar). El Gobierno ha establecido la estrategia de la cadena de suministro de alimentos como una de las principales prioridades durante la crisis de COVID-19, haciendo hincapié en la producción y comercialización local. Por ejemplo, se han identificado las posibles zonas de producción dentro de la región de Antananarivo y se ha creado un diagrama de flujo de productos con las necesidades territoriales. Se ha procurado aumentar las ventas en línea de productos locales para suministrar alimentos a la población más vulnerable y a las regiones que se enfrentan a la escasez de alimentos.

• Pequeños Estados Insulares en Desarrollo del Pacífico (PEIDP). La población de las zonas urbanas de los PEIDP depende en gran medida de los alimentos importados. Para mitigar los efectos de la pandemia, en Fiyi, Samoa, las Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Vanuatu, los gobiernos han distribuido material de siembra e insumos agrícolas a los hogares urbanos y periurbanos, y han fomentado la producción de alimentos, especialmente de cultivos de ciclo corto. En Vanuatu, para garantizar el suministro de productos locales a los hogares a un precio asequible, el Plan de respuesta de seguridad alimentaria COVID-19 dio prioridad a la iniciativa «Commercial food basket», en la que el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural colaboró con el campesinado local en la recogida de productos y su venta en su almacén a un precio asequible.

• Nantes (Francia). El proyecto «Paysages nourriciers» se creó para cultivar hortalizas en las zonas urbanas a fin de proporcionar alimentos gratuitos a mil hogares vulnerables. Los lugares de producción están dispersos en 11 distritos de toda la ciudad, con prácticas agrícolas totalmente ecológicas, utilizadas por un total de 250 jardineros urbanos con el apoyo de los especialistas locales. Entre julio y octubre de 2020, tenían previsto cosechar 25 toneladas de hortalizas, que luego se distribuirían directamente a las familias afectadas.

• Davao (Filipinas). El programa de la ciudad puesto en marcha durante la pandemia de COVID-19 «The Buyback Repack and Distribute» ha beneficiado tanto a los proyectos productivos urbanos que tenían dificultades para vender y distribuir sus alimentos como a las familias con bajos ingresos, cuyas economías se habían visto gravemente afectadas durante el cierre. Gracias al programa, el gobierno municipal compró alimentos frescos a la pequeña producción local a precios de venta más altos de lo normal y los distribuyó entre 12.000 familias vulnerables de Barangay Tibungco.

La emergencia alimentaria propiciada y acelerada por la pandemia de la COVID-19 parece indicar la necesidad de apostar por los sistemas alimentarios locales, que no solo deben ser apoyados por los gobiernos municipales, sino también por los estatales y supranacionales, como la Unión Europea. Es el momento de prescindir de acuerdos comerciales como el de la UE-MERCOSUR y apostar decididamente por una transformación radical y urgente de la forma en que se producen y distribuyen los alimentos. Los apoyos económicos, como los de la PAC, deben ir en esa línea. No hay más tiempo que perder, vivimos una emergencia sanitaria, social, climática y medioambiental sin precedentes que requiere respuestas comprometidas con el planeta y con las personas.

Andrés Muñoz Rico

Responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra

Nota: Las referencias de este texto están disponibles en www.soberaniaalimentaria.info

Revista SABC

«El pálpito de la población y la respuesta rápida están en manos de los grupos informales»

CONVERSATORIO

Hablamos con cuatro personas involucradas en la ayuda alimentaria, desde su trabajo y desde su militancia. No buscábamos solo mujeres, pero que las cuatro lo sean, según ellas, no es casualidad. Dialogan también varias formas de manejar estos sistemas: el modelo comunitario y el de la Administración.

PARTICIPANTES

Emilia Murillo: Desde hace siete años estoy en el Centro Social Rey Heredia, en Córdoba. En la crisis de 2013, las familias lo perdieron todo y una serie de personas y colectivos decidimos ocupar este espacio porque era necesario para ofrecer apoyo no para la gente de nuestro distrito, que comprende algunos de los barrios más pobres de España (Campo de la Verdad, Sector Sur y Barrio Guadalquivir), sino para gente de toda la ciudad. Yo me ocupo, con otras compañeras, de la cocina y del comedor social.

Adriana Mateos: Vivo en Fresnedillas de la Oliva (Sierra Noroeste de Madrid), un pueblo con un alto porcentaje de población en riesgo de exclusión, pero con gran presencia de movimientos sociales. En el confinamiento nos organizamos para apoyarnos entre el vecindario (unos 1500 habitantes) y para buscar donaciones con las que comprar alimentos. Acabamos montando un colectivo, Fresnecuida, y gestionamos la ayuda de 42 familias. Además, hacemos actividades para la autogestión y apoyo y acompañamiento a personas que lo necesitan.

María Aranda: Soy trabajadora social en la comarca de la Serranía de Ronda (Málaga) y en mi asociación Montaña y Desarrollo gestionamos un programa de atención urgente financiado con el 0,7 del IRPF. Los servicios sociales comunitarios nos derivan a familias para cubrir necesidades fundamentales: alimentación, alquiler, ropa, material escolar, etc. El programa es eminentemente asistencialista, pero nosotras intentamos darle una vuelta y coordinarnos con otros programas que llevamos y con otros recursos públicos e iniciativas sociales.

Uxi D. Ibarlucea: Soy una de las responsables del Centro de Desarrollo Rural Carrión de los Condes en el centro de la provincia de Palencia, con más de 30 años de trayectoria. Entre nuestras acciones tenemos un programa de ayudas de emergencia en el que desde hace 3 años contamos con recursos de apoyo para personas vulnerables y, aparte de alimentos, podemos pagar suministros u otras necesidades urgentes.

La alimentación es un derecho fundamental, pero cuando se reparte comida en situaciones de emergencia y en una sociedad como la nuestra, ¿en qué se ha convertido? ¿De qué dietas hablamos?

Emilia: En nuestro centro social no tenemos ayudas de ninguna administración ni de bancos de alimentos porque queremos demostrar que si la ciudadanía se une, puede conseguir logros importantes. Todo son aportaciones de colectivos afines, huertos agroecológicos y, sobre todo, de la gente. Siempre compramos en el pequeño comercio cercano. Cocinamos de acuerdo con la dieta mediterránea, los menús de siempre: lentejas, cocido, habichuelas… Antes cocinábamos allí y lo dábamos elaborado, pero ahora hemos tenido que cambiar el método y hacer bolsas con los ingredientes que necesitan para elaborar ellos mismos ese menú. Hemos visto a muchas familias pasar hambre.

María: Nosotras también intentamos evitar supermercados para las compras. Trabajamos en coordinación con el banco de alimentos de la comarca, complementando sus productos no perecederos con un cheque de alimentos que las familias pueden gastar en el comercio local, que consideramos también un colectivo vulnerable. Les recomendamos que sean productos frescos para tratar de tener un menú equilibrado. Cuanto más cronificada esté la familia en la pobreza y en la exclusión, más cuesta que tengan una dieta sana, por falta de hábitos, de amor propio, de esperanza… Nuestro trabajo con ellas pasa por que recuperen la dignidad y se consideren personas. Es muy difícil pedirles que hagan un puchero porque es más sano o comprar un zumo que no sea de bote porque cuesta que planifiquen una alimentación más sana y equilibrada. Nosotras también hemos visto a familias pasar hambre, hemos recibido llamadas agradeciendo el apoyo porque ese mes no se han acostado ningún día sin cenar. De todas formas, pienso que en el mundo rural el hambre se sostiene un poco más porque existen las redes informales de apoyo y estamos más próximos, somos menos anónimos. También los ayuntamientos están más cerca de la gente.

Adriana: Yo aquí he notado lo mismo, las redes de apoyo están más cercanas, pero esto tiene una doble cara. La gente que estaba acostumbrada a pedir apoyo no ha tenido reparo en venir a pedirlo; sin embargo, a quienes se vieron en esta situación con el COVID, creo que les costó más acercarse por miedo a que se supiera. Sobre el tipo de alimentación, preparamos cestas teniendo en cuenta las dietas culturales de todo el mundo, con los productos del banco de alimentos de Madrid, complementado con alimentos frescos de Mercamadrid. Nuestra impresión es que donde más apremia la necesidad, menos preocupación hay sobre los valores relacionados con la alimentación.

> En el mundo rural el hambre se sostiene un poco más porque existen las redes informales de apoyo y estamos más próximos.

Uxi: En el campo se pasa necesidad pero no hambre, es lo que tradicionalmente hemos dicho, lo que pasa es que hemos asimilado tanto las formas de vida urbanas que también se han roto muchas relaciones de cercanía en los pueblos. Los colectivos de base nos dan un montón de lecciones. Las organizaciones de María y mía también son de base, pero hemos entrado en el círculo de la Administración y nos ponen muchas trabas. La trabajadora social evalúa a las familias y decide qué necesitan; tenemos un acuerdo con las tiendas de la zona y las familias compran allí los alimentos. Esta ayuda es un servicio esencial, ¿pero cómo se alimenta a las personas y a costa de qué? Todas somos víctimas de este modelo de alimentación industrial, pero esas familias lo son especialmente, compran muchos productos procesados. Con empatía y cercanía intentamos cambiar esos hábitos, pero esto es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, no es cuestión de origen ni de nivel académico. Yo trabajo con personas universitarias que proceden del medio rural y consumen mucha comida basura.

Colaboración del comercio local en Fresnecuida.
Foto: Adriana Mateos

En la ayuda alimentaria, ¿qué prácticas se pueden poner en marcha para salir del asistencialismo?

Uxi: Sí, al final lo que hacemos es caridad pagada por la Administración. En nuestro caso también ha habido familias que nos han traído alimentos por su cuenta, sobre todo por un tema de conciencia religiosa. Veo que, desgraciadamente, la gente del vecindario es más capaz de aportar a una causa externa y lejana que a la gente más próxima. Yo vivo en una comarca con pueblos pequeños y nos hemos movido para que algunas personas y ayuntamientos nos cedan terrenos para la huerta y asesorar a la gente que lo necesite para que produzcan alimentos y se establezcan relaciones. Es más digno eso que tener que pedirlos, pero nos está resultando complejo porque cuesta encontrar respuesta; en esta sociedad todas podemos llegar a ese deterioro personal que impide ver satisfacción en la producción de tus propios alimentos.

Adriana: Fresnecuida nació de forma muy espontánea y horizontal, con un grupo de WhatsApp para hablar de miedos que surgían en el confinamiento, sobre lo que nos esperaba y para darnos apoyo y acompañamiento. Se acabó juntando gente de diferentes orígenes y perfiles que antes no habían hecho una actividad conjunta y las familias usuarias participan también en la elaboración de las cestas semanales. Es muy bonito ver que se generan esas sinergias, pero nos ha costado que la gente entienda la necesidad de generar un espacio sólido, de la ciudadanía, y ahora vamos con mucho cuidado para que perdure. Para acabar con el asistencialismo hace falta una educación en torno al apoyo y a la convivencia, que no haga falta que llegue una pandemia para que la gente se movilice por el bien común. No hay cultura de la ayuda más allá de un sentido católico, hay muchos miedos.

Emilia: Nosotros siempre nos hemos negado al asistencialismo, siempre hemos querido que las familias que piden alimentos colaboren en el centro en lo que quieran, unas dos horas a la semana o lo que puedan, limpieza, biblioteca…, que se encuentren en familia. Les hemos dado cursos de manipulación de alimentos y de cultivo en el huerto que tuvimos (y luego nos quitaron). En realidad es una colaboración mutua y así hemos funcionado estos siete años. Ahora con la pandemia todo esto no podemos hacerlo; cubrimos necesidades, pero no como nos gustaría. En Córdoba, el centro de servicios sociales funciona muy mal y lo hemos denunciado. Muchas familias están sin asistencia y en el centro no podemos ayudar a todas.

En este y otros temas, las iniciativas de base ponéis en evidencia las limitaciones de las instituciones públicas. ¿Cómo influye la burocracia en el fondo y en la forma de la ayuda alimentaria?

Uxi: Por ejemplo, comprar a los productores locales estos alimentos, las administraciones ni se lo plantean. Solo el hecho de diversificar la compra según familias ya complica todo.

Emilia: Durante el confinamiento nos llamaban trabajadoras sociales para derivarnos familias porque era una situación grave y su burocracia iba a ser muy larga; se sentían impotentes. En el centro social no pedimos ningún papel, solo los datos básicos de contacto.

Adriana: A nosotros los servicios sociales también nos mandaban recados que no podían hacer ellos y nos han derivado casos. Y nos alucinó

> Donde más apremia la necesidad, menos preocupación hay sobre los valores relacionados con la alimentación.

un poco que en una población tan pequeña en plena pandemia no hubiera señales de vida del ayuntamiento, fue después de nuestras demandas cuando respondió. Ahora nos han cedido un colegio antiguo y preparamos allí las cestas, pero hemos estado muchos meses en una nave que prestó una vecina. Además del tinglado burocrático, hay miedos de que cierto sector de la población piense mal.

María: En nuestra asociación trabajamos en coordinación con los servicios sociales de la comarca, que son quienes nos derivan a las familias; y se están viendo atados de pies y manos porque no llegan las ayudas públicas. Las organizaciones sociales tratamos de trasladar las necesidades y las respuestas; y cuando ellos las asimilan y las incluyen en sus protocolos, ya se han quedado desfasadas, ya son otras. Por eso se apoyan en nosotras, en el tercer sector, incluyendo aquí Cáritas y el Banco de Alimentos.

Uxi: Este grupo ha demostrado que el pálpito de la población y la respuesta rápida están en manos de los grupos de base. Hay gente que ante una situación se organiza y da respuestas; es lo más rápido, efectivo y solidario. La Administración es lenta, pesada, está lejos. ¡Algunas incluso se han cerrado durante la pandemia! Me están dando ganas de ir mañana a mi centro, pasar de papeles y ponerme a trabajar con los productores y con mi grupo de consumo.

¿Cómo imagináis que las cosas fueran de otra manera? ¿Qué tendría que pasar?

Adriana: Yo tengo superclaro que en el ámbito educativo se tendrían que estar tocando ciertos temas, en el colegio y en el instituto, que creo que es donde se dan los principales cambios de mentalidad y de valores. Hablar de solidaridad, de diversidad, de apoyo mutuo... ¿Cómo conseguir eso? A través de los colectivos sociales y la política, pero para mí la política es lo que hacemos en la asociación, lo otro es un circo que a veces no entiendo.

Uxi: Si me pusiera a soñar, tendríamos que partir, además de temas educativos, de un reparto más justo de todo, de la tierra, los recursos… En la Administración debe haber una escucha activa a la ciudadanía y a la gente que está comprometida en iniciativas de base. Debe haber mucha flexibilidad. Por parte de la ciudadanía, apertura de miras, que podamos ver lo grato que es ayudar al otro y lo que supone, esto nos haría más felices a todos.

María: Que la Administración confíe en el tercer sector, que es el que está en contacto con la población. En esta comarca hay una población envejecida y vulnerable; y la Junta de Andalucía ofrece a una empresa privada durante 50 años la asistencia a la dependencia, por lo que ha cortado radicalmente la oportunidad de que nuestra gente pueda ofrecer este servicio. A la vez, repiten que la gente tiene que emprender, es una incoherencia. Por ejemplo, el patrimonio municipal podría ponerse al servicio de la ciudadanía para el emprendimiento, para el fomento de la autonomía de las personas.

Emilia: Mi sueño sería la renta básica para todo el mundo, esto sería lo único que podría cambiar las cosas. Hay familias jóvenes que de otro modo no van a salir nunca de esa situación porque vienen de generaciones que han estado asistidas por servicios sociales. También pediría que escucharan más a los colectivos y a los centros sociales, y no que los cierren, como ha pasado en Madrid y otros lugares. Ya quedan pocos ejemplos en España porque no les interesa que haya espacios que ayuden a la gente a pensar y a apoyarnos unos a otros. Cuando nos unimos podemos hacer grandes cosas. Esta sería mi mayor felicidad. Como esta semana cuando ha venido Leonor, de una familia del centro, y me ha dicho que ha encontrado trabajo y me abrazaba y nos besábamos y lo celebrábamos.

Revista SABC

La Fundició

IMAGINARIOS 'RURURBANOS' PARA LA TRANSICIÓN ECOSOCIAL

UNA EXPERIENCIA DESDE L'HOSPITALET

L'Hospitalet de Llobregat es la ciudad con más densidad poblacional de Europa y se encuentra a pocos kilómetros de Barcelona. Estas particularidades netamente urbanas chocan con la proximidad del Parque Agrario del Llobregat y con una población conformada por personas migrantes de origen rural. Estas características han sido clave para la creación de la red de apoyo vecinal.

La historia de Europa es, en parte, una historia de lo que podríamos llamar «colonización interna». Un proceso que se extiende al menos desde el siglo XIV con la formación de los primeros Estados modernos y el desarrollo de la economía capitalista hasta hoy: los cercamientos y la destrucción de la propiedad comunal se han acompañado del aniquilamiento de la cultura campesina y, en definitiva, de todos aquellos mundos de vida en los que la actividad de los seres humanos aún está vinculada a unos territorios específicos y a sus ritmos naturales, mediante un complejo sistema que justifica la depredación sin límite de los recursos, el extractivismo y la acumulación en manos de unos pocos.

En este proceso, el proyecto ilustrado europeo y el desarrollo del capitalismo no han dejado de trabajar para producir la no existencia de esos otros mundos de vida de los que hablamos, ya sea directamente con la aniquilación material de quienes los sustentan o indirectamente colocando sus saberes, formas de vida y cosmovisiones fuera de lo que puede ser pensado, o bien integrando cualquier diferencia en la ilusión de una sociedad liberal formada por una «clase media universal» (masculina, blanca, burguesa y con capacidades, género y sexualidad normativas) hecha de individuos que se piensan autónomos, cuyo éxito o fracaso depende exclusivamente de su esfuerzo individual, reunidos tan solo por las instituciones del Estado y por el acto de consumir.

La estigmatización de las periferias y de sus habitantes

Este proceso ha ido acompañado también de grandes movimientos de población, del campo a la ciudad, en los que masas de campesinos y campesinas se han visto obligadas a abandonar las tierras para vender su fuerza de trabajo en las ciudades industrializadas, cuyas periferias y márgenes han terminado por habitar. En Catalunya y el Estado español, estos desplazamientos se han dado con características específicas, resultado de su propia evolución histórica: desde la incorporación tardía de España a la industrialización hasta el proyecto desarrollista del franquismo. De hecho, serían las políticas agrarias del franquismo, dirigidas a la industrialización del campo, las que acelerarían la despoblación del medio rural, al mismo tiempo que el régimen ensalzaba la figura del campesinado como custodio de las esencias nacionales. A este respecto, es importante destacar que fue el propio régimen franquista quién impulsó la folclorización y *museificación* de la

Taller de cestería con la artesana Mònica Guilera. Las cestas son un prototipo para sustituir las cajas de plástico en las que se distribuyen las llamadas cestas de la cooperativa de consumo Keras Buti. Foto: LaFundició.

cultura popular, desacoplando así sus manifestaciones y sus prácticas de los mundos de vida y de los socioecosistemas rurales que les daban sentido y en los que, a su vez, cumplían una función social.

Según se vaciaban los pueblos, se atestaban las ciudades, lo que resultó en el crecimiento desmesurado e incontrolado de sus periferias. L'Hospitalet es, en buena parte, resultado del trasvase de población de zonas rurales, primero desde el resto del Estado español en los años sesenta y setenta y desde América Latina, África y Asia a partir de los noventa. Estas poblaciones comparten el hecho de haber sido objeto de dos procesos interrelacionados: la precarización y la estigmatización. Así, la infravivienda, el hacinamiento o la explotación laboral, muestras palpables de esta precarización, se traducen a su vez en la estigmatización de las periferias y de sus habitantes, representados como un peligro social y un foco de degeneración cívica. Frente a esta estigmatización se dan multitud de reacciones: por un lado, la *aculturación*, es decir, la negación del propio origen social y cultural y la asimilación a los valores de una clase media urbanita idealizada; por el otro, las formas de oposición y disidencia que han imaginado, organizado y puesto en práctica quienes, de entrada, estaban destinados a ocupar un lugar subalterno en la historia.

Herramientas para producir autonomía

Las epistemologías y las economías campesinas o las prácticas obreras de apoyo mutuo y cooperación son precedentes históricos que consideramos necesario *contemporaneizar*. Iniciativas como la cooperativa de consumo y la asociación Keras Buti o la Xarxa de suport veïnal de l'Hospitalet se inscriben en ese ámbito. El cooperativismo, por ejemplo, históricamente ha formado parte del repertorio de herramientas que las clases subalternas han utilizado para resistir a la explotación y producir formas de autonomía. Algunos barrios de l'Hospitalet, como la Torrassa, a principios del siglo xx fueron un foco de iniciativas cooperativistas que desarrollaban un papel fundamental como espacios de socialización, culturales y de autoeducación. La cooperativa de consumo agroecológico Keras Buti, creada en 2018, tuvo el impulso inicial de LaFundició y la asociación gitana de l'Hospitalet Lacho Baji Cali, con el objetivo de promover prácticas culturales y a la vez económicas ligadas a la ruralidad desde las periferias de la ciudad. Partíamos de la asunción de que el pueblo gitano tiene también una vinculación histórica con lo rural que aún pervive en algunas de sus formas de ser y estar en el mundo, y que también pueden servirnos para imaginar y poner en práctica una economía fundamentada en los principios de la economía feminista, poniendo en el centro los cuidados y la producción de satisfactores para una vida buena, que sea a su vez compatible con la vida en el planeta.

Keras Buti nace para poner encima de la mesa el derecho a la alimentación sostenible para las clases populares. Cuenta con cuatro nodos de distribución (tres en l'Hospitalet y uno en Barcelona) y coopera con un productor agroecológico del Parc Agrari del Baix Llobregat, la zona agrícola más próxima a Barcelona y su área metropolitana, y un productor de naranjas que cultiva dos hectáreas en Tortosa, propiedad de su familia, antigua propietaria de la desaparecida *masia* Cal Bielet del Garro en L'Hospitalet.

Construcción de un váter seco en la finca Les Cabasses (Parc Agrari del Baix Llobregat) de LaFundició. En la foto, Neus Juvillà, vecina del barrio de la Florida de l'Hospitalet. Foto: LaFundició.

Precisamente debido a su proximidad, el Parc Agrari siempre se ha visto amenazado por la construcción de grandes infraestructuras logísticas, por el afán urbanizador y, en definitiva, por la especulación. La supervivencia de este agroecosistema, que incluye el delta del río Llobregat como un enclave de especial biodiversidad, depende en parte de la sensibilización ciudadana, como así demostró la paralización del macroproyecto Eurovegas. L'Hospitalet ha vivido de espaldas a este conflicto territorial, aunque, dada la proximidad del Parc Agrari, no le sea ajeno; de hecho, el pasado año, también la movilización ciudadana organizada en las plataformas No més blocs y Depana, entre otras, presionó para que la justicia anulase la aplicación del Plan Director Urbanístico de la Gran Vía, que prevé la urbanización de una parte significativa de Cal Trabal, la última zona agrícola de la ciudad. En este tira y afloja, durante la crisis de la COVID-19, la cooperativa de trabajo LaFundició ha adquirido una finca de dos hectáreas en el Parc Agrari para proveer de productos agroecológicos a la cooperativa de consumo Keras Buti, ayudar a los campesinos y campesinas —incentivando también la incorporación de jóvenes, sobre todo gitanos, con el apoyo del Pla Integral del Poble Gitano— y evitar la especulación con la tierra. Uno de los objetivos de la iniciativa Keras Buti es, precisamente, conformarse como una herramienta para activar la toma de consciencia de todos estos vínculos entre la ciudad, el sistema alimentario y el campo, y un espacio donde producir nuevos imaginarios rururbanos y ecosociales.

Conciencia de la interdependencia rural-urbana

Al hilo de lo anterior, podemos entender que Barcelona, su área metropolitana y el Parc Agrari del Baix Llobregat constituyen un único ecosistema social cuyo metabolismo es actualmente insostenible. Entendemos que las esferas social, económica y biológica son interdependientes y que, por tanto, es necesario crear imaginarios y poner en práctica modos de vida y economías que resulten deseables pero requieran un menor flujo de recursos y generen menos residuos. Resultan paradójicos y una muestra de las enormes desigualdades sociales de este territorio, los altos índices de injusticia energética, las dificultades para el acceso a rentas (ya sean rentas del trabajo, subsidios o recursos públicos como forma de salario indirecto), a la vivienda o una alimentación saludable. En l'Hospitalet estas diferencias se han visto exacerbadas durante la crisis sanitaria y social de la COVID, máxime si tenemos en

Visita a Cal Trabal organizada por LaFundició en 2017, en el marco de la investigación acción «¿De qué comerán las ciudades del futuro?». Foto: LaFundició.

Encuentro en Les Cabasses con distintas iniciativas relacionadas con la práctica de la apicultura, la cocina política y la bioconstrucción. Foto: LaFundició.

cuenta que un porcentaje muy significativo de la población de la ciudad se encuentra en una situación administrativa irregular. No tener papeles empuja a esta población a la economía sumergida y dificulta su acceso a los servicios públicos, lo que supone más riesgo de contagio.

Por otro lado, los servicios sociales, que deberían servir para compensar estas desigualdades, han devenido una herramienta de contención y control del descontento de los grupos sociales más vulnerabilizados, al tiempo que han generado dependencias y, de forma indirecta, también los han estigmatizado. En ciudades como l'Hospitalet, una buena parte de estos servicios se ha externalizado a grandes empresas para las que la exclusión social se ha convertido en un negocio. Toda esta red, lejos de dinamizar a la sociedad para denunciar y atajar las causas estructurales de las desigualdades, ha contribuido a su cronificación.

La falta de acceso a alimentos es un problema silenciado que saltó a la opinión pública durante los meses de confinamiento estricto. En ese tiempo, un sector de la población cuya fuente de ingresos es el trabajo irregular, en muchos casos vinculado a los cuidados, no pudo obtener renta alguna y carecía de garantía social. Las entidades «benéficas» habituales en la gestión de los bancos de alimentos se vieron desbordadas y un grupo de vecinas, con el impulso de varias entidades de la ciudad, como las cooperativas Keras Buti y LaFundició, bajo el paraguas de la Xarxa de Economia Social de l'Hospitalet (XESLH), se organizó en la red de apoyo vecinal a partir de distintos nodos ubicados en cinco barrios de la ciudad para dar respuesta a la necesidad básica de la alimentación y para ayudar a las trabajadoras del hogar y cuidadoras, ofreciendo también asesoramiento laboral y de extranjería, en cuestiones sanitarias y de vivienda, y en situaciones de violencia machista y racista. El acceso a los fondos de contingencia de la Xarxa d'Economia Social (XES), las aportaciones a través de la caja de resistencia de personas y colectivos, y las aportaciones en especie de comercios locales, productores del Parc Agrari del Llobregat o Ecocentral (distribuidora de productos agroecológicos a comedores escolares situada en el barrio del Gornal, en l'Hospitalet), hicieron posible una primera respuesta a las urgencias de tantísimas personas en la ciudad. Posteriormente, los propios vecinos y vecinas que recibían ayuda fueron uniéndose a la red de apoyo para participar en su organización. La red se convirtió en un espacio donde alimentar y experimentar dinámicas comunitarias en los distintos barrios de la ciudad desde una perspectiva emancipadora y generadora de autonomía y autocuidado. Además, desde el inicio, se tuvo clara la importancia de vincular a los campesinos y campesinas agroecológicos de proximidad con el cuidado de las personas y colectivos más vulnerables. Se generó una conciencia de las relaciones de interdependencia entre las zonas rurales y las urbanas. El hecho de que gran parte de la red estuviera formada por mujeres migrantes y cuidadoras —muchas agrupadas en el colectivo Mujeres Unidas Entre Tierras— y la necesidad de priorizar el apoyo a las agricultoras agroecológicas del Parc Agrari del Baix Llobregat abrieron nuevas posibilidades de soporte mutuo e interdependencia. Sostener, en momentos de crisis global, las vidas de quienes cuidan las tierras mientras se sostienen las vidas en las ciudades. Con estas personas, a su vez, en gran medida, migrantes y dedicadas a los trabajos de cuidados con un fuerte vínculo con lo rural y con unos saberes muy ricos en formas de organización comunitaria, finalmente, se ha ido definiendo la red de apoyo mutuo como un espacio de transmisión y remezcla de conocimientos y memorias en torno a la comida y la cocina; pero también respecto a las formas de articulación y de organización colectiva para hacer frente a las múltiples violencias que atraviesan los barrios de nuestra ciudad y las personas que los habitan.

LaFundició
www.lafundicio.net
www.lafundicio.net/kerasbuti
https://xes.cat/lhospitalet/

DE UN VISTAZO Y MUCHAS ARISTAS

EL MST DESPLIEGA SUS ACCIONES EN TIEMPO DE CRISIS SANITARIA

Las cifras del hambre en Brasil han ido a peor desde que la extrema derecha de Bolsonaro llegó al poder. De acuerdo con datos de la FAO, si en 2014 37,5 millones de personas vivían una situación de inseguridad alimentaria moderada, a finales del 2019 esta cifra ascendió a 43,1 millones. Brasil es el primer país del mundo en tasa de mortalidad por la COVID-19, con cifras oficiales que registran 222.666 víctimas hasta febrero del 2021.

Pero Brasil también es el país del MST (Movimiento sin Tierra), admirado por su capacidad de acción y organización de acciones directas y colectivas, como la recuperación para el pueblo de fincas de grandes terratenientes. Durante la pandemia, el MST ha estado extremadamente activo, con acciones que van desde la organización de una plataforma digital con guías de estudio (*Formação em tempos de Corona*), grupos de debate y cursos remotos en la Escuela Nacional Florestán Fernandes, que han atendido multitud de militantes en todo el país, hasta la emisión *online* de un programa divulgativo sobre la cultura organizativa, como Comida de Verdade.

Y, desde luego, también se ha trabajado en el campo de la emergencia alimentaria, donde se contabiliza, desde el inicio de la pandemia hasta septiembre del 2020, la distribución de 3400 toneladas de alimentos frescos y orgánicos, y más de 50.000 platos de comida para personas en situación de vulnerabilidad social por todo el país.

«Las donaciones son acciones directas de diálogo entre el pueblo del campo y de la ciudad. Cada vez que tiene lugar una donación de nuestros campamentos o huertas comunitarias, llegan a la mesa de un brasileño alimentos contra el hambre y contra la desigualdad social por las que Brasil siempre pasó, pero que se intensificaron ahora en este período de pandemia», nos explica Kelli Mafort, de la dirección nacional del MST. Además del trabajo en su propio país, las brigadas internacionalistas del MST ubicadas en Zambia, Haití y Venezuela también participan en acciones de solidaridad. Aunque, como dice Kelli, «para que se mantenga la solidaridad y para que los productos continúen saliendo de los sembríos para llegar a las ollas vacías de la ciudad, no basta con la buena voluntad, necesitamos políticas públicas».

INDONESIA. TRUEQUE DE PESCADO POR ARROZ

¿Y la gente de la pesca? La llegada de la pandemia y los meses de confinamiento también han representado un grave problema para este sector que depende tanto de poder salir a la mar y del mantenimiento de los canales de comercialización a consumidores finales, a la restauración, a las escuelas o a la exportación. En muchos lugares, además, las administraciones han actuado con mucha lentitud.

En el distrito de Gunungkidul, en Indonesia, la Asociación de Pescadores, que agrupa a más de 300 personas, vio que de la noche a la mañana muchas de sus vías de comercialización se cerraban y que el precio de sus capturas disminuía aproximadamente un 50 %. Inmediatamente, propusieron a las autoridades incorporar sus productos en los sistemas de ayuda alimentaria, pero les dijeron que era complicado manejar productos frescos. Sin embargo, encontraron una alternativa.

Su organización, que forma parte del Sindicato de Pescadores de Indonesia, inició un intercambio de alimentos con la Asociación de Agricultores de Tenajar, a través del movimiento Fishermen's Food Barn. Así que estas dos comunidades han encontrado la fórmula para garantizarse sustento alimentario mutuamente y, en aldeas como Pabean Udik Indramayu o Gebang Udik Cirebon, se intercambian anchoas, caballa ahumada, atún y cangrejo desmenuzado, por arroz y verduras.

Actualmente, el sistema alimentario industrial se nutre de nuestros impuestos a través de la PAC, pero también de los fondos dedicados a la ayuda alimentaria.

Pero esto podría ser diferente.
Vamos a imaginar la

DESAPARICIÓN DE LA AYUDA ALIMENTARIA

Las personas recibimos como ayuda las sobras de la industria alimentaria, de muy baja calidad nutritiva.

CON EL IMPULSO DE
MOVIMIENTOS SOCIALES RURALES Y URBANOS

Estos fondos deben destinarse a promover una alimentación sana, justa, que cuide la tierra.

100 % AGROECOLÓGICA

Se potencia así la soberanía alimentaria de los territorios, se motiva la vuelta al campo y se relocaliza una economía local y cooperativa.

Una parte de la alimentación de toda la población se cubre colectivamente a partir de contribuciones de empresas y trabajadores y de los fondos de la PAC.

Todas las personas recibimos mensualmente una renta alimentaria básica para adquirir alimentos agroecológicos.

De esta forma, se acaba con situaciones de necesidad alimentaria.

La distribución de la renta alimentaria se canaliza a partir de iniciativas comunitarias como cooperativas de consumo, comedores populares, mercados campesinos...

...así también se va creando y fortaleciendo un nuevo sistema alimentario...

...en el que lo fundamental no es acumular riqueza, sino hacer posible el derecho universal a la alimentación.

WIN TO WIN

ALTERBANC: LA POBLACIÓN PRECARIZADA Y EL CAMPESINADO LOCAL

Un día tuve la suerte de reunirme con el responsable de la distribución en España de los 80 millones de euros anuales que se reciben de la Unión Europea para comprar alimentos para las familias vulnerabilizadas.

—¿Qué le parecería que en lugar de comprar comida procesada proveniente de grandes industrias alimentarias globalizadas, con este dinero se comprara comida fresca y sana a las pequeñas fincas ecológicas que resisten en nuestros territorios? Según mis cálculos —le expliqué—, más o menos en un año, permitiría mantener en funcionamiento unas dos mil granjas que en total garantizan unos cinco mil puestos de trabajo.

—Pero es que yo tengo que comprar comida, me da igual generar o no generar trabajo en el medio rural —me dijo.

Así que me fui al Ministerio de Agricultura y les dije:

—¿Por qué ustedes no exigen que estos fondos públicos se gasten con criterios que apoyen el trabajo y los medios de vida en el medio rural?

Y me dijeron que es que ellos trabajan en desarrollo agrario, que no les cuente cosas de acción social.

Pues, más o menos, así es la realidad y mientras el tema de los 80 millones se debate de un departamento a otro, ya son muchos años perdiendo la oportunidad de entender que los recursos públicos dedicados a la ayuda alimentaria deben repercutir —como las compras públicas de los comedores escolares o de la alimentación en las prisiones— en acciones que generen a su vez otros beneficios.

Y ante esta situación inexplicable surgió AlterBanc, un espacio que agrupa a colectivos de la economía social y colectivos agroecológicos y que procura movilizar fondos económicos para demostrar que esta vía no solo es posible, sino que es una buena fórmula para apoyar la alimentación de familias empobrecidas mientras ayudamos al campesinado más marginado por este sistema neoliberal.

www.alterbanc.org

PERÚ. OLLAS COMUNES EN TERRITORIOS DESESTRUCTURADOS

Al norte de Lima, en el distrito de Carabayllo, la población vive a medio camino entre una vida rural ya casi desaparecida (menos del 3 % dedicada a la agricultura) y una vida urbana de condiciones muy deficientes, con un acceso limitado al agua potable y falta de canalizaciones de desagüe. La minería de arcillas y cerámicas para construcción que se extendió por toda la zona, no han generado beneficio, al contrario, solo destrucción ecológica.

Aquí la llegada de la pandemia se sumó a la crisis económica existente, por ello las mujeres de estas zonas se organizaron en grupos vecinales para cocinar colectivamente con el apoyo de una oenegé local, DEMUS.

Durante la primera y segunda cuarentena y hasta la fecha, estas mujeres, agrupadas en la Red de Mujeres Organizadas de Carabayllo, continúan cocinando más de 80 ollas comunes. Cada olla alimenta diariamente a unas 180 familias. Estas mujeres viven en condiciones precarizadas y olvidadas por el Estado peruano, ya que los bonos económicos no les llegaron. Como dice

Elisabeth Huacchillo, miembro de la olla común en Torreblanca, «esta olla común la arreglamos para poder abastecer al pueblo, para tener un alimento digno. Esta olla común es mi almuerzo, mi desayuno, porque realmente no tenía qué comer, me sentía tan mal de que mis hijos me pidieran y me dijeran "Mamá, tengo hambre"...

Estamos repartiendo 180 o 200 platos diarios. Un saco de arroz se va en un día y tengo que buscar de un lado a otro lado ayuda para solventar la olla. Nosotras somos las que cocinamos, nos sacrificamos por los hijos; en cambio, los varones..., hay algunos que van, reciben y se llevan las raciones sin participar».

www.demus.org.pe

LAS COCINAS ESCOLARES SE TRANSFORMAN EN COCINAS COMUNITARIAS

¿Qué podíamos hacer cuando el confinamiento cerró muchas cocinas escolares y mandó al paro a sus cocineros y cocineras? ¿Qué podíamos hacer cuando las agricultoras que abastecían estas escuelas tenían sus alimentos sin distribuir mientras muchas familias en situación de precariedad no tenían cómo alimentarse? A estas preguntas encontraron respuesta entidades como Menjadors Ecològics, que trabajan habitualmente en estos escenarios para asegurar una alimentación sana a niñas y niños, y rápidamente entendieron que esos espacios podían convertirse en cocinas comunitarias para responder a la emergencia alimentaria derivada de la pandemia: ofrecer un menú saludable y sostenible, dar trabajo al personal de cocina y mantener la compra a la producción local para disponer de alimentos frescos.

El proyecto se presentó a varias administraciones públicas. Muchas, sin visión estratégica o bloqueadas por la situación, lo rechazaron, pero otras apostaron por él, como los ayuntamientos de Palma y de Orduña. En Palma abrieron en junio doce cocinas que sirvieron gratuitamente ese mes más de 4500 menús de producción local ecológica a la población infantil confinada. Lo financiaron las propias administraciones con el apoyo de la Fundación Carasso. Según los cálculos de Menjadors Ecològics, por cada 100 menús al mes, este proyecto no gasta sino que moviliza 6000 euros en la producción local y genera un puesto de trabajo.

Por ejemplo, las cestas de ayuda alimentaria contienen legumbres de bote que no se producen en el entorno. Una cocina comunitaria (la propia cocina de escuela de primaria, en horario de tarde) puede cocer legumbres de producción de proximidad, ocupar y formar a una persona y hacer un reparto sostenible generando una relación social entre las personas de un mismo barrio o comunidad.

Considerando el contexto actual, con un aumento de la población vulnerabilizada, un sistema de ayuda alimentaria unidireccional, alimentos sin criterios nutricionales, etc., Menjadors Ecològics invita a las administraciones públicas a implantar esta iniciativa que, como han demostrado, consigue grandes beneficios sociales con poca inversión, dinamiza la economía circular elaborando un menú saludable en cocinas colectivas y genera ocupación para ofrecer opciones a las personas que no solo necesitan alimentarse, sino también construir un futuro.

www.menjadorsecologics.cat

Stéphanie Chiron y Patricia Dopazo

El futuro de la alimentación es la democracia

EL PROYECTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ALIMENTACIÓN EN FRANCIA

En 2017 un grupo de trabajo interdisciplinar comienza a madurar seriamente la propuesta de «Seguridad Social de la Alimentación». Participan en él miembros del sindicato campesino Confederation Paysanne y de la red CIVAM, movimientos sociales como Ingeniería Sin Fronteras y Reseaux Salariat o la investigadora Dominique Paturel. Se trata de un proyecto anticapitalista que va más allá de hacer desaparecer la ayuda alimentaria.

¿Cómo imaginamos que se accederá a los medios de vida en el próximo siglo? ¿Cómo se compartirán? Esta son algunas de las preguntas de partida del proyecto Seguridad Social de la Alimentación. Quienes lo defienden imaginaron horizontes utópicos; pero, más allá de generar debate sobre la ayuda alimentaria y fomentar la sensibilización frente a los retos alimentarios del futuro, proponen una alternativa real y concreta.

La red CIVAM (Centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural), creada hace setenta años, promueve prácticas para aumentar la autonomía y la sostenibilidad social, ambiental y económica de los proyectos productivos. Jean-Claude Balbot es ganadero en Bretaña y estuvo a cargo de las cuestiones de democracia alimentaria en la red. Cuenta que hace unos diez años hicieron una dolorosa reflexión: está muy bien la venta directa y hacer productos de calidad, pero así solo se alimenta al 10 % de la población y, de esta forma, es muy difícil reivindicar una agricultura sostenible. «Por extraño que parezca, para una organización profesional agraria la cuestión alimentaria no existe y esto es debido a la industrialización de la agricultura», explica Jean-Claude. «Hay una enorme brecha entre la producción y el consumo, entre los campesinos y los ciudadanos. Por eso nos propusimos investigar sobre el acceso a los alimentos: ¿cómo se alimentan las personas a las que no tenemos la oportunidad de conocer porque nos ignoran y las ignoramos? La voluntad industrial es la división del trabajo y lo que queremos es lo contrario para reconstituir vidas colectivas, queremos socializar la comida y la agricultura; y uno de los medios para conseguirlo es una propuesta como la Seguridad Social de la Alimentación».

> «Está muy bien la venta directa y hacer productos de calidad, pero así solo se alimenta al 10 % de la población.»

La raíz del problema

Mathieu Dalmais es agrónomo y miembro del grupo Agricultura y Soberanía Alimentaria de Ingeniería Sin Fronteras en Francia, que trabaja en la propuesta de la Seguridad Social de la Alimentación. «Nos identificamos mucho con el texto fundacional del sindicalismo, la Carta de Amiens (1906), porque habla de dos necesidades sindicales: mejorar las condiciones de trabajo y transformar la profesión para sacarla de las garras del capitalismo y ponerla al servicio del bien común. Con esta lógica trabajamos en la Seguridad Social de la Alimentación». Enlazando con la reflexión de la red CIVAM, ven claro que la agricultura no puede transformarse sin tener en cuenta las políticas alimentarias y, sobre todo, la manera en la que se construye la demanda. «Tenemos que dejar de decir que es el consumidor quien informa de lo que quiere comer, porque sus decisiones están restringidas por el contenido de su monedero. Hay que decidir desde el punto de vista ciudadano, a través de una decisión colectiva. La alimentación es una variable que se ajusta dependiendo del presupuesto familiar y su valor puede perderse por el camino, por eso como consumidores no tomamos las mismas decisiones que como ciudadanos».

Sin embargo, en nuestra condición de consumidores, creemos que somos libres. Para Dominique Paturel sería prioritario deconstruir esa idea de libertad condicionada por el sistema económico agroalimentario. Dominique es investigadora en el INRA (Instituto Nacional de Investigación Agraria), pero su perfil es particular, ya que su larga carrera previa como trabajadora social la lleva a formular preguntas que incomodan en los ambientes académicos. «En cuestiones alimentarias, somos las mujeres quienes sabemos cómo arreglárnoslas, cómo abastecer a la familia. Sin embargo» —explica—, «desde el momento en que el problema de la alimentación se convierte en un problema público, se reformula en una visión masculina que elimina los matices y enfoques basados en la vida cotidiana, que no se consideran serios en los institutos de investigación o en las universidades. La cuestión seria es una visión más técnica, más económica».

Debemos dejar de lado los proyectos militantes de circuito corto, locales, ecológicos, etc. e intentar abrirnos a un imaginario colectivo que nos permita pensar en términos de democracia.

Dominique percibe preocupada que en Francia hay un renacimiento muy poderoso de la filantropía en cuestiones de acceso a los alimentos, en proyectos supuestamente alternativos que a menudo son solo tiritas que no cambian nada. «Vivimos una especialización en la lucha contra la pobreza cuyo objetivo no es eliminar sus causas. Y una cosa es cierta: no podemos avanzar en estos temas con quienes nos han llevado donde estamos hoy», afirma tajante. Para ella las experiencias de huertas en los bajos de los edificios, los grupos de compra solidaria, etc. son interesantes; pero si no se plantea la cuestión de la igualdad, seguirán bloqueados por un techo de cristal antidemocrático. «Debemos dejar de lado los proyectos militantes de circuito corto, locales, ecológicos, etc. e intentar abrirnos a un imaginario colectivo que nos permita pensar en términos de democracia». Para ella, esa es la clave de la Seguridad Social de la Alimentación.

¿En qué consiste?

Se trata de proporcionar a toda la ciudadanía una cantidad mensual para la adquisición de alimentos. «En Francia tenemos una tarjeta sanitaria (*Carte Vitale*) que nos permite acceder a los cuidados médicos. El usuario adelanta un pago que posteriormente el Estado le reembolsa. Partiendo de este mecanismo, se podrían abonar 150 € al mes para acceder a la alimentación» —explica Mathieu—. «La propuesta se apoya en tres pilares para repensar la organización de una economía no capitalista y alcanzar el derecho a la alimentación. El primero es la universalidad: queremos dar el derecho a todo el mundo; el segundo, el acceso a una alimentación elegida de manera colectiva; y el tercero, la financiación de este sistema a través de las cotizaciones».

Detengámonos aquí. ¿Cómo se elegiría de manera colectiva la alimentación? El joven agrónomo explica que el proceso estaría regulado en el convenio que crearían los fondos de Seguridad Social de Alimentación en cada región, donde las personas elegidas por votación o por sorteo decidirían a qué productos se tendría acceso con la tarjeta, teniendo en cuenta qué es lo que falta en esa zona, qué quiere la gente, etc. «Si, por ejemplo, en un territorio faltan frutas y verduras ecológicas, se podría llegar a un acuerdo con los agricultores locales para facilitar la transición de su producción. En ningún momento queremos imponer que todo el mundo consuma agroecológico, pero sí que pueda decidir sobre su alimentación e informarse sobre todas estas cuestiones».

La Seguridad Social de la Alimentación, entonces, transformaría también el modelo productivo. Mathieu explica que se priorizarían los acuerdos con organizaciones de estatutos no capitalistas. «Con los campesinos, que son quienes se encuentran a menudo bajo una explotación individual, se discutiría sobre los márgenes de beneficio para establecer precios fijos y justos por su trabajo». ¿Y qué pasaría con las grandes superficies? «Si quieren que la gente pueda proveerse allí, tendrían que ser transparentes sobre qué margen sacan y de qué manera está calculado, con la finalidad de que el beneficio redunde en los trabajadores y no vaya a ninguna otra parte. Si no fueran capaces de adaptarse, no habría ningún acuerdo con ellas».

Jean-Claude, como ganadero, está convencido de que la Seguridad Social de la Alimentación es uno de los remedios a la desintegración del medio rural. «No sé cómo es la situación en España, pero en Francia es catastrófica. Es una guerra de unos contra otros por el acceso a la tierra, por el acceso a las subvenciones, por no hundirse. Podemos ver, y las cifras están ahí para demostrarlo, que el campesinado está desapareciendo». Le escandaliza especialmente que, habiendo personas

Mandala colectivo en un encuentro de agricultura sostenida por la comunidad. Foto: Baladre

jóvenes que quieren incorporarse al sector, tengan que invertir una cantidad enorme de capital para empezar a producir. Cree que poniendo en marcha este proyecto de reforma profunda se podría duplicar fácilmente el número de granjas y fincas. «No debemos conformarnos con hacer un poco de agricultura ecológica y de circuito corto; los llamamientos a los ciudadanos para que compren tierras son experiencias muy interesantes, pero tienen poco o ningún impacto en la economía agrícola general. Para nosotros, hace falta cambiar el estatus del agricultor y necesitamos que los fondos de la Seguridad Social de la Alimentación puedan invertir en la agricultura, apropiarse de la tierra, recuperarla y liberar al productor de su obligación de pagar por el trabajo».

Socializar el valor generado por el trabajo

Laura forma parte de Réseau Salariat, una asociación de educación popular que trabaja a partir de las tesis de Bernard Friot, sociólogo y economista de referencia en Francia. El trabajo de este colectivo se basa, entre otras cosas, en las conquistas de las y los trabajadores durante el siglo pasado y en una fuerte crítica a la raíz del sistema capitalista, con propuestas para sustituirlo. «La filosofía del sistema general de la Seguridad Social, tal y como lo estableció en Francia Ambroise Croisat, es realmente la idea de que toda creación de riqueza es fruto del trabajo humano. La Seguridad Social de la Alimentación se basaría también en la socialización del valor creado por los trabajadores», explica Laura.

Laura y Mathieu establecen un paralelismo con el sistema sanitario, que en Francia es universal, y consideran muy inspirador su proceso de creación. «Aquí el funcionamiento de la seguridad social, desde su creación en 1945 hasta 1967, fue de carácter anticapitalista, tres cuartas partes lo gestionaron los sindicatos de trabajadores y una cuarta parte los empresarios», explica Mathieu. «No obstante» —añade Laura—, «estamos en una sociedad en la que hay que negociar y llegar a un compromiso y a un equilibrio de poder entre las partes implicadas. Es fundamental que los fondos se gestionen democráticamente. Y, dicho esto, siempre hay profesionales que están fuera del marco, que se niegan a ser cubiertos por convenios o que no pueden serlo porque no reconocemos todos los tipos de medicina válida. Aquí se plantea la cuestión de quién decide lo que es válido, y tiene que ser la ciudadanía».

Así pues, la financiación de la Seguridad Social de la Alimentación se haría a través de las cotizaciones, unos 120.000 millones al año,

que corresponden a 150 € al mes por persona. Consideran muy importante diferenciar esto de una financiación a base de impuestos, ya que estos crean una dependencia del Estado, que centraliza y recauda. «Nos independizamos. Queremos tomar directamente la cotización sobre el valor añadido que aportan los trabajadores a la sociedad. Claro que necesitamos el Estado para poder organizar todo esto, y por otras muchas cosas; no se trata de rebasarlo completamente, sino de crear un financiamiento autónomo», aclara Mathieu. Y sigue Laura: «La seguridad social, a través del sistema de cotizaciones sociales, permite socializar el dinero. Se deduciría un porcentaje del valor económico creado por todas las empresas de Francia que iría a parar a los fondos de la Seguridad Social y la Alimentación, lo que permitiría financiar a quienes trabajan en el sector e invertir en nuevas empresas coherentes con nuestros valores y apoyar la transición de otras dispuestas a evolucionar hacia un sistema de funcionamiento más virtuoso y a salir de las ataduras del sistema actual. Sería una ilusión poner a los representantes del pueblo al frente de las arcas de la seguridad social sin crear garantías que nos permitan salir del sistema capitalista».

Organización de la producción

La estrategia para poner en marcha esta propuesta se ha acelerado con la precariedad alimentaria que ha visibilizado el confinamiento, ya que su primera etapa consiste en generar debate social sobre la ayuda alimentaria y convencer a los movimientos sociales de que es una alternativa posible. «Con los equilibrios de poder en Francia y las orientaciones del gobierno, no es cuestión de ir a ver los políticos y hacer *lobby* para que lo pongan en marcha. Vista la ambición democrática del proyecto es importante que sea sobre todo el pueblo quien se implique», explica Mathieu, que piensa que la educación popular de hoy sobre estos temas será un criterio de éxito de una eventual puesta en marcha del proyecto mañana.

Lo cierto es que cada vez más colectivos se están interesando por la propuesta y queda por delante seguir estructurando la idea; por ejemplo, la organización de la producción. Si los fondos se gestionan a escala regional, cada región debe organizar la producción en función de su demanda. Dominique Paturel está convencida de que la autonomía alimentaria no es posible a este nivel. «Tenemos estudios que demuestran que si se cultivara todo el departamento del Hérault (región del suroeste de Occitania), solo podríamos alimentar la ciudad de Montpellier. La autonomía debe reflejarse en el ámbito de la cuenca hidrográfica o incluso en la zona interdepartamental» —explica, y habla del necesario proceso de transición—: «¿Qué poder tenemos frente a la agroindustria internacional? No mucho, excepto el poder de reapropiarnos de lo que podemos hacer en los territorios donde estamos».

Para Laura el nivel de decisión debe ser lo suficientemente cercano al territorio como para garantizar la máxima democracia directa. «Cuando hablamos de alimentos de calidad, rápidamente pensamos en los alimentos ecológicos. Creemos que hay que desconfiar de esta etiqueta porque hay toda una serie de intereses económicos tras ella. España, por ejemplo, es un gran proveedor de productos para Francia y, si vemos las condiciones de trabajo, la explotación de los seres humanos y de los recursos naturales, dista mucho de ser virtuoso y ecológico». La activista señala que todos los pueblos en resistencia, desde Rojava hasta Chiapas, pasando por los pueblos andinos, han situado la alimentación en el centro de sus proyectos de revolución. «Si en Francia llegamos a una relación de fuerzas que haga posible la puesta en marcha de un sistema de Seguridad Social de la Alimentación, espero que tenga eco en muchos otros países del mundo y que haya cosas que imaginar en términos de trabajo en red y de fuerzas transnacionales. Nuestro sistema "ideal" no evitará los conflictos, los debates y las luchas de poder; pero en eso consiste también la democracia, en estar en conflicto, en un conflicto sano, transparente y con luchas de poder equilibradas. Ya que nos permitimos pensar en la utopía, espero que sea desde una perspectiva feliz. No hemos inventado la pólvora».

Stéphanie Chiron
Podcast Toma la Tierra

Patricia Dopazo
Revista SABC

Revista SABC

FÁBRICAS DE CARNE Y MARES DE SOJA

Cuando se analizan las consecuencias ambientales y sociales de la producción de carne, suele haber un elemento central que se queda fuera del mapa: los impactos de la alimentación de la ganadería industrial. Dos informes recientes de Ecologistas en Acción y de GRAIN investigan en detalle este eslabón de la cadena alimentaria.

El debate sobre el impacto ambiental del consumo de carne sigue abriéndose paso en cada vez más sectores de la sociedad, incluyendo a la población más joven. Escuchamos hablar de ello en las tertulias de los medios de comunicación generalistas, pero también en la calle. Y es que, lejos de los beneficios ambientales y sociales que genera la ganadería extensiva, con el pastoreo como práctica central, la ganadería industrial o intensiva no solo maltrata a los animales y genera importantes problemas ambientales por contaminación de suelos, agua y aire, sino que requiere numerosos tratamientos sanitarios, como los antibióticos, con probadas repercusiones en la salud humana. No podemos olvidar, además, que el hacinamiento prolongado de animales está relacionado con la aparición de virus como la gripe aviar o la peste porcina, que pueden derivar en zoonosis y pandemias que afecten al ser humano a gran escala.

La producción española tiene una responsabilidad importante en el crecimiento de este sector y cada vez está más orientada a la exportación. En el año 2018 se produjeron aquí más de 7 millones de toneladas de carne, a pesar de que el consumo en los hogares solo fue de 2 millones. En el caso del porcino, España es el cuarto mayor exportador mundial y el primero a China. Los impactos sobre el territorio de la instalación de macrogranjas se han estudiado con mucho detalle y la ciudadanía cada vez está más informada y organizada, especialmente en el medio rural, donde las numerosas iniciativas contra su instalación han conformado la coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial.

Sin embargo, el debate social en los países enriquecidos a menudo se queda en esta parte más visible y cercana, pero no profundiza en la complejidad de la cadena alimentaria y en sus impactos globales, dejando fuera del análisis un elemento central: ¿Cómo se alimenta a esta enorme cantidad de animales? ¿De dónde viene ese alimento y qué impactos provoca a su vez? Y es que todas estas cifras descomunales dependen de ingentes cantidades de pienso con un componente determinante, la soja. ¿Quizás no prestamos atención porque los impactos de la soja están fuera de nuestros territorios?

La proteína más rentable

La expansión mundial de la soja se inició a mediados de los noventa, a partir de los avances en la ingeniería genética que hicieron posible la soja transgénica resistente al herbicida glifosato, patentado por la transnacional Monsanto (fusionada con Bayer desde 2018). La implantación de los transgénicos estuvo ligada a una fuerte resistencia campesina y ciudadana, que advertía de los problemas de estos cultivos para la biodiversidad y para las economías locales. El tiempo lo demostraría.

Hoy en día el cultivo de soja alcanza los 125 millones de hectáreas, una superficie que equivaldría a la suma de toda la península ibérica y Francia; desiertos verdes que apenas necesitan mano de obra pues todo su ciclo, altamente dependiente de insumos y energía, está mecanizado. Esta expansión es responsable, entre otras cosas, de la deforestación pero también ha

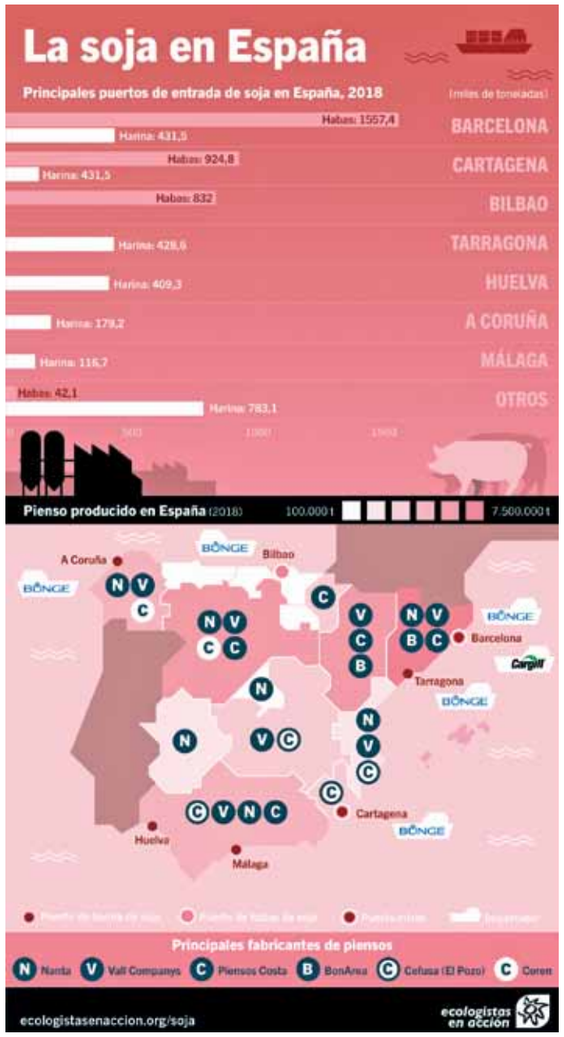
supuesto una enorme pérdida de biodiversidad y de hábitats, además de provocar el desplazamiento de poblaciones rurales y originarias que son desposeídas de sus medios de vida tradicionales y se ven empujadas a la pobreza.

El 87 % de la soja importada por la UE está destinado a la fabricación de piensos para ganadería. Es un componente esencial de estos productos debido a su elevado contenido de proteína (38 % del haba, 48 % de la harina), con aminoácidos esenciales para el desarrollo de los animales. El auge de la ganadería industrial en el Estado español ha ido en paralelo también con la fabricación de piensos para la alimentación industrial de aves y cerdos (recordemos que la mayor parte de la carne de caprino y ovino procede de la ganadería extensiva), hasta liderar el ranking de productores europeos, con 37,5 millones de toneladas producidas en 2018 según datos de la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos (FEFAC).

El desembarco de la soja

En la Unión Europea, la mayoría de soja utilizada en ganadería se importa del continente americano (Brasil, Argentina y EE. UU.) en forma de haba y de harina. En 2019, España importó 2,8 millones de toneladas de harina de soja (también llamada torta) que entran por diferentes puertos, entre los que destacan Barcelona, Tarragona y Huelva; en el caso del haba de soja, se importaron 3,3 millones de toneladas, concentradas en los puertos de Barcelona, Bilbao y Cartagena, donde se sitúan plantas molturadoras de las multinacionales Bunge y Cargill, que la transforman en harina y aceite. Finalmente, la harina de soja se distribuye por tierra mediante importantes sistemas logísticos (ferrocarril en su mayoría) con destino a las plantas elaboradoras de piensos, concentradas sobre todo en Catalunya, Aragón y Castilla y León, los territorios con mayor cabaña ganadera industrial.

El informe *El papel de Catalunya y el Port de Barcelona en la construcción de un sistema alimentario (in)sostenible*, recientemente publicado por GRAIN, analiza en detalle el papel del puerto de Barcelona en el negocio de la soja, pues es por esta estructura logística por la que entra el 44 % del total de habas de soja importadas por el Estado español. Es interesante aterrizar estos datos. Hablamos, en toneladas, de 1,5 millones, que en superficie de cultivo suponen medio millón de hectáreas dedicadas al monocultivo



de soja. Respecto a su procedencia, la mitad viene de Brasil, donde el gobierno de Bolsonaro se ha caracterizado estos años por sus abiertas conexiones con el agronegocio de la soja, al que ha favorecido con sus políticas. Actualmente, la zona de mayor producción de soja en este país se encuentra en las tierras deforestadas de la zona septentrional de El Cerrado (la sabana más grande del mundo, de una enorme riqueza ecológica), por lo que podemos decir que anualmente la entrada de soja por el puerto de Barcelona procedente de Brasil es el equivalente a unas 230.000 hectáreas de deforestación, un 14 % de todos los bosques de Catalunya. El procesamiento de esta soja supone 900.000 toneladas de CO_2 equivalente al año, un 2 % de

Principales perfiles industriales productores de pienso en España
(Ecologistas en Acción, a partir de datos de las empresas del año 2020)

FABRICANTE DE PIENSOS	PRODUCCIÓN ANUAL DE PIENSOS (TON)	GRUPO EMPRESARIAL	RELACIÓN CON INTEGRADORAS Y OTRAS EMPRESAS DEL GRUPO
		Holdings empresariales	
NANTA SA Principal empresa productora de pienso en España	2.850.000 (2016)	**NUTRECO** Empresa internacional líder en nutrición animal. Integrada a su vez en SHV Holdings (Makro, SHV Energía, etc.).	Nutreco es propietaria del Grupo SADA, COPAGA e INGA FOOD, dedicadas a la producción y transformación industrial de carne. Comercializa marcas como CUK o PIMPOLLO.
CEFUSA Empresa integradora productora de pienso y de carne de porcino y vacuno	(No disponible)	**GRUPO FUERTES** De origen español, tiene presencia internacional con marcas como El Pozo (gran proyección en Asia), AquaDeus, Profusa, Terra Natura, etc.	CEFUSA facilita la mayor parte de las materias primas a la transformadora El Pozo, con una producción superior a las 450.000 t anuales solamente en su sede de Murcia. Grupo Fuertes es también propietario de Procavi, otra integradora cárnica.
		Empresas integradoras	
VALL COMPANYS Producción de piensos para más de 2100 granjas asociadas al grupo.	2.000.000	Integradora de porcino, vacuno y avícola con presencia en todo el Estado, con marcas como Agroturia, Frimancha, Fripor, etc.	El Grupo produce en total más de 550.000 t de carne anuales, destacando la producción porcina. A través de filiales, como la integradora Agrocesa, vende sus productos a la marca Campofrío.
PIENSOS COSTA AVISERRANO Producción de piensos para más de 1000 granjas asociadas al grupo.	>1.000.000	**COSTA FOOD GROUP** Integradora de carne de porcino y aves. Sus exportaciones suponen más del 50 % de su facturación.	Segundo productor de porcino estatal. Provee a grandes supermercados a través de marcas como Villar, Casademont o Costa Food Meat. Proveedor de carne de ave y derivados a Mercadona a través de Avinatur.
		Grandes cooperativas	
BONÀREA COOPERATIVA Productora de pienso e integradora ganadera de porcino, avícola y vacuno.	>1.000.000	**BONÀREA AGRUPA** Cuenta con más de 4.500 agricultores y ganaderos. Producción (2019): 36 millones de pollos, 800.000 cerdos de engorde, etc.	Línea alimentaria principal que cubre de principio a fin la cadena alimentaria. Bonàrea comercializa sus productos a través de sus más de 500 tiendas propias repartidas por todo el territorio español.
COREN AGROINDUSTRIAL Proveedor de insumos y servicios a integrantes del grupo: piensos, I+D, etc.	>1.000.000 (2015)	**COREN** Cooperativa de segundo grado con cerca de 5000 socios e integrados, en avícola, porcino y vacuno. Está entre las 100 cooperativas con mayor facturación a nivel mundial.	La cooperativa transforma la carne en sus instalaciones a través de su propia marca (Coren), y la distribuye en grandes cadenas de supermercados y establecimientos propios.

las emisiones de gases de efecto invernadero de Catalunya. Es paradigmático que, con estos datos, Barcelona sea este año la Capital Mundial de la Alimentación Sostenible.

De soja a carne

La producción de piensos se enmarca en el modelo de «integración ganadera», en que una misma empresa cubre todo el proceso productivo, desde la fabricación de los insumos necesarios para la producción (incluidos los piensos), hasta la transformación y comercialización de los productos finales. En este complejo proceso participan numerosas granjas de personas particulares que, a modo de franquicia, firman un contrato con la empresa y reciben todo lo necesario para cumplir su delimitado papel, sin ninguna capacidad de decisión ni maniobra y asumiendo muchos riesgos.

El trabajo de investigación de Ecologistas en Acción, *Los rostros de la soja*, arroja luz sobre este sector económico y proporciona información sobre los principales fabricantes de piensos del Estado, clasificados en función de las diferentes fórmulas de integración empresarial existentes. Por un lado, los *holdings* empresariales, con

El monopolio de la exportación mundial de granos

En la conexión de la soja entre el Cono Sur de América y el Estado español, las empresas Cargill y Bunge juegan un papel fundamental. Su mecanismo monopólico de intermediario logístico global les da un poder enorme hacia ambos lados de la cadena de suministro. Pueden marcar los precios a los que pagan el grano y el precio al que lo venden. El caso de la soja es un buen ejemplo, pues estas empresas son las responsables de comprar las habas a los empresarios agrícolas locales, almacenarlas en sus silos, llevarlas al otro lado del océano, descargarlas y almacenarlas en destino, en ocasiones, procesarlas como harina en el puerto de desembarco y venderlas a las fábricas de piensos citadas en este artículo.

De hecho, aunque Cargill es la segunda empresa privada más grande de EE. UU., poco se conoce de ella. Su propaganda corporativa lo dice todo: «Somos la harina de su pan, el trigo en sus fideos, el maíz en sus tortillas, el chocolate en tu postre, el aceite en tu ensalada, la carne de tu cena o el algodón en tu ropa». Actualmente, el 88 % de la propiedad de la empresa sigue en manos de la familia Cargill, catorce de cuyos miembros son multimillonarios. Actúa en 70 países y mueve cada años 200 millones de toneladas de maíz, soja o trigo. Pero sobre ella recaen muchas miradas de preocupación. En el caso de Brasil, Cargill y otras empresas aceptaron la moratoria de ampliación de cultivos de soja en la Amazonía, pero simplemente desplazaron geográficamente sus intereses. Sus mecanismos de compra se extendieron entonces hacia la región de El Cerrado, un ecosistema vital para toda la red fluvial del que solo en 2018 se perdieron 95 000 km² a costa de cultivos de soja.

Para profundizar en este análisis, recomendamos lecturas como el informe de Greenpeace Cargill: the company feeding the world by helping destroy the planet.

actividad en otros sectores como la construcción, la energía o las finanzas; existen también las empresas integradoras, que suministran todos los insumos necesarios a las granjas «asociadas» a las que les compran toda su producción, que transforma y comercializa la misma empresa a través de otras filiales o marcas; y, por último, las grandes cooperativas, cuyo origen son cooperativas ganaderas que producían su propio pienso y que, con los años, fueron ampliando su control sobre los eslabones de la cadena e incorporando elementos del modelo de integración vertical (del funcionamiento cooperativo mantienen poco más que el nombre).

Vemos, entonces, que la producción de carne industrial aglutina diferentes cadenas de producción largas y monopolizadas por una pocas empresas en determinados puntos del proceso. Para analizar su impacto, se requiere una visión amplia. No puede dejarse de lado toda esta complejidad, que trasciende en mucho nuestro territorio en un ejemplo muy claro de mercado globalizado, con impactos ambientales, sociales, culturales y un poder creciente en manos de empresas con estrechos vínculos con el poder político. Este es el verdadero precio final de la carne y sus derivados, que parecen tan baratos en los supermercados.

Revista SABC

PARA SABER MÁS

—www.ecologistasenaccion.org/soja
—El informe de GRAIN se publicará próximamente en grain.org

Revista SABC

«Se escuchó en todo el Ecuador que los campesinos han salvado el país»

ENTREVISTA A RICHARD INTRIAGO, DIRIGENTE DEL MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO DE ECUADOR

Cuando comenzó la pandemia, las terribles imágenes del caos en Guayaquil llegaron a las pantallas de todo el mundo. Lo que pasó después, sin embargo, no tuvo trascendencia mediática a pesar de ser una de las respuestas más contundentes y eficaces a la COVID-19. El campesinado lideró una reacción popular sin precedentes en el país.

«Como ustedes sabrán, el COVID le dio muy fuerte a nuestro país»— comienza Richard— «y la ciudad de Guayaquil se convirtió en el terrible epicentro de la pandemia desde la primera semana. El golpe que recibimos fue devastador, realmente era de llorar lo que estaba ocurriendo». El líder campesino y doctor en Agroecología, que vive muy cerca de Guayaquil, comienza su relato recordando también la completa paralización de los políticos y funcionarios, «escondidos» durante aquellas semanas de marzo y abril en las que los hospitales se colapsaron, había muertos por las calles y el miedo lo invadía todo.

La gente del campo también se guardó al principio, asustada de lo que ocurría, pero a los quince días fue insoportable: «Como dirigentes sociales, ya no pudimos estar más en casa. Nos comunicamos entre todos los miembros del movimiento campesino en el país y tomamos la decisión de dejar las cuarentenas y poner nuestras vidas al frente de un proceso de lucha por la supervivencia». Sabían que sumar fuerzas era clave, así que hicieron un llamamiento a todas las organizaciones sociales del país y plantearon rápidamente, de forma telemática y sin recursos, una estrategia conjunta. «Cuando la tuvimos, llamamos al gobierno nacional a un acuerdo para enfrentar juntos la situación. Ni ellos ni ninguna administración pública tenían ni idea de qué hacer. No dieron nunca respuesta». Ahí nacen las brigadas campesinas, pero también una asamblea nacional popular que al cabo de unos meses reuniría más de 1500 organizaciones de todo tipo.

La prioridad fue mantener con alimentos suficientes a las familias para que pudieran hacer la cuarentena. «En los barrios más pobres de Guayaquil la gente cada día tiene que salir a ganarse el alimento porque no tiene ni un euro al día para vivir. Los camiones no querían entrar a

Centro de acopio. Foto: Movimiento Nacional Campesino

los centros de acopio de las ciudades por miedo a contagiarse y el precio de los alimentos se había multiplicado por siete. Por otro lado, el campesinado sabía que en las zonas rurales se estaba pudriendo la comida. Lo lógico era hacer una conexión entre el campo y la ciudad para que los alimentos llegaran; conocemos a nuestro pueblo y el sistema alimentario y sabíamos que estábamos a punto de enfrentar una crisis alimentaria y el caos social». Richard recuerda que en esos días si salías a la calle te detenían y sitúa en esa desobediencia campesina el primer punto de quiebre de todo lo que sucedería.

Brigadas Campesinas por la Soberanía Alimentaria

Las brigadas empezaron a trabajar con las asociaciones de transportistas, coordinando cien camiones que se movían permanentemente por todo el país hacia los centros de acopio campesinos de la Costa, la Sierra y la Amazonía, trabajando con los colectivos de barrio y distribuyendo alimentos a las familias más necesitadas. «Una primera enseñanza importante fue que una distribución campesina masiva en las ciudades también regula precios. Comenzamos a suplir el papel de las terminales de víveres y los supermercados; y eso, sumado a nuestra enorme acción en redes sociales, asustó a los monopolios que habían aprovechado la situación para especular. En Guayaquil la alcaldesa reabrió la terminal de víveres por miedo a que nos quedáramos con todo el mercado, sin embargo, lo que buscábamos era la bajada de precios y la reactivación de los canales de comercialización», recuerda Richard. Cuando consiguieron estos dos objetivos, abandonaron Guayaquil y enfrentaron el problema en Quito y en otros lugares, donde también los mercados estaban cerrados.

Es importante tener en cuenta que hablamos mayoritariamente de pequeño campesinado, de un sector que enfrentaba su propia crisis al no poder comercializar y que, en algunos casos, no tenía una finca diversificada que asegurara su alimentación. No tenía capacidad de ser cien por cien solidario. «Lo que creamos fue un sistema de comercialización directa, los productores tenían asegurada su remuneración para trabajar tranquilos. Sin embargo» —apunta Richard—, «hay un comportamiento intrínseco de los campesinos que es la solidaridad: cuando le decíamos a un compañero que necesitábamos 500 racimos de plátanos, él nos decía que nos mandaba 100 más por su cuenta, por si acaso. ¡Eso no ocurre en el comercio común!». Entonces, ese «por si acaso» lo podían destinar a donaciones directas a las fundaciones que trabajan con quien más lo necesita o a la gente que les estaba apoyando a cambio de algún recurso o de alimentos, porque «mucha gente que vivía alrededor de los centros de acopio nos pidió que les diéramos trabajo a cambio de comida. Y fue muy lindo porque eso lo hizo posible la solidaridad campesina», señala.

El Movimiento Campesino fue registrando y contabilizando todo lo que pasaba para poder publicarlo. Calculan que aquellos primeros meses manejaron unos 2 millones de dólares en alimentos, personal voluntario, transporte, etc., una cantidad de recursos que llegó a más de 100.000 familias. Richard recuerda un debate al que le invitaron, organizado por el diario El Universo, donde, entre otras personas, estaba la alcaldesa de Guayaquil. «Ella dijo que habían invertido más de 35 millones de dólares para 150.000 familias; yo le dije que en cambio nosotros no habíamos tenido plata para invertir pero habíamos movilizado 2 millones de dólares y ayudado a 100.000 familias. ¡Imagínese con 35 millones lo que hubiéramos hecho! Probablemente hubiéramos resuelto los problemas de la mayoría de ecuatorianos». El líder campesino denuncia que mucho dinero en las instituciones se pierde en corrupción y que, además, muchos de esos lotes de comida fueron a gente que no los necesitaba. La participación de las dirigentes barriales en los repartos fue clave porque sabían a dónde tenía que llegar el alimento. «Si hay que enfrentar otra crisis, la lección aquí está clara, le dije a la alcaldesa de Guayaquil, hay que contar con la organización social, que está dispuesta a dar la vida por su país y además conoce específicamente dónde están los problemas y las prioridades».

Abastecer de alimentos y proteger derechos

Todo era nuevo y se iban identificando y atacando las dificultades sobre la marcha. La población campesina de Ecuador también tenía problemas alimentarios por culpa del monocultivo, así que el siguiente paso fue poner en marcha el trueque como medio para enfrentar la crisis alimentaria y económica. Quinientas familias campesinas de la Costa hicieron intercambio con quinientas familias de la Sierra, sin medir el valor monetario, pensando en una cantidad de alimentos variados que pudiera alimentar a 500 familias durante quince días. «En la Costa llenaron un camión con naranjas, plátanos, mandarinas, zapallos, arroz… y en la Sierra esperaban los indígenas del páramo con lechugas, zanahorias, coles, tomates… Además, de manera simbólica, intercambiamos un pato y un cui para visibilizar la magnitud de lo lindo que estaba pasando», recuerda Richard con cariño. «Todos pensaron que habían ganado, que se les devolvía más de lo que habían dado, porque los productos de cada zona son subestimados, siempre se paga poco. El cambio fue una maravilla. Los medios lo difundieron porque no tenía que ver con nuestras luchas sociales, que es lo que la prensa esconde, y entonces comenzaron a replicarse, especialmente de mano de las organizaciones de mujeres». En Guayaquil la práctica del trueque ha arraigado a partir de entonces con una organización de unas 25.000 personas que intercambian de todo, ya no solo alimentos.

En palabras de Richard, el aprendizaje no tiene precio «porque supone saber cómo funcionamos, dónde atacar, cómo organizarnos». Afirma con rotundidad que el campesinado sabe cosas que ni el gobierno sabe, pero que, sin duda, el mayor logro fue la imagen que quedó de la población campesina. «Se escuchaba por todo el Ecuador que los campesinos han salvado el país, que están en primera línea con los médicos. No hay más que ver que ahora todos los políticos hablan bien de nosotros, porque si no, serían abucheados por la población». Pero repite que no fue fácil, él mismo pasó el virus y estuvo enfermo durante semanas. Recuerda con tristeza que, al inicio, se abrazó con los compañeros, decididos a ir adelante pasara lo que pasara y «efectivamente algunos de ellos ya no están porque murieron de COVID, incluso algunos miembros de la dirigencia nacional, compañeros clave nuestros».

Estas nuevas posiciones políticas sienten que les dan autoridad y ventaja, y sus convocatorias tienen ahora mucha más respuesta. Están preparados para poner en marcha lo que han llamado «la brigada del pueblo», que será clave de ahora en adelante. «El proceso ha ido creciendo de forma autónoma y la sociedad ha ido reparándose sin apoyo del gobierno y esto es muy

Trueque campesino. Foto: Movimiento Nacional Campesino

Boticas campesinas, medicina ancestral contra la COVID

RICHARD INTRIAGO

«Las boticas se crean a partir de lo que vimos en las Brigadas, cosas muy tristes, pero reales. Aquí los ancianos no tenían ninguna asistencia, yo mismo vi ancianos solos, echados a morir, que me decían que tenían ese virus. *A menudo, tenían solo gripe, se les había tapado la nariz; pero mucha gente murió así, por miedo, no por* COVID. *Nuestras farmacias estaban desabastecidas. Así que la siguiente decisión fue crear las brigadas de salud y las boticas en los barrios más pobres, boticas populares, sencillas, pero con lo más importante: simplemente una mesa y un* pocotón *de hierbas de la Sierra, de la Amazonía y la Costa, jengibre, eucalipto, ajo, miel de abeja en monodosis con limón, etc. De esta forma había algo que tomar para pensar en curarse, y además con nuestra medicina ancestral. Comenzó a funcionar y no solo porque cura, sino porque la gente sintió que tenía algo con lo que protegerse de la enfermedad».*

importante para la crisis que está por venir. Este proyecto lo hemos hecho no solo para abastecer de alimentos, también para proteger derechos». Saben que el gobierno seguirá poniendo resistencia porque les ve como una amenaza permanente y porque a los monopolios no les interesa esta fuerza campesina. Richard recuerda que durante el confinamiento paraban sus camiones y se llevaban presos a compañeros porque solo podían pasar los alimentos de la industria, no los alimentos campesinos. «Cuando pasaba esto, viralizábamos rápidamente esos vídeos en redes sociales y como muy tarde al día siguiente nos liberaban los camiones». En ese sentido, a pesar de la dificultad que han tenido para comunicar su trabajo en los medios de comunicación convencionales, resalta la importancia que han tenido los teléfonos móviles y las redes sociales digitales para hacer posible todo este proceso. «Hemos tenido compañeros comunicadores que han estado documentando cada movimiento con cámaras por todos lados. Ha sido una comunicación popular, con muy buen trabajo de edición, algunos con subtítulos en inglés para que llegara a más países. Todo esto no nos ha costado nada; si solo calculamos el precio de esto, ¿a cuánto ascendería?».

«Cuando estamos unidos, hay capacidad de acción»

Pero habría cosas que mejorar, la autocrítica es constante. Las relaciones internas en Ecuador son muy complejas. «Somos muchas nacionalidades diferentes, muchas cosmovisiones… No hay unidad. Con las organizaciones exclusivamente indígenas no pudimos llegar a acuerdos, encontramos complicado cooperar con ellos». También reconocen que hay un enorme trabajo que hacer con la población urbana para enfrentarse a las lógicas creadas por la industria alimentaria que han conseguido que el alimento se vea como una mercancía.

Actualmente están abasteciendo al campesinado de insumos orgánicos —por la salud y para bajar los costos de producción—, creando un banco de semillas y, lo más importante, abriendo pequeños puntos de acopio en las ciudades. «Se trata de más de 1000 puntos en casas de gente que se quedó sin trabajo, de madres solteras, etc., donde instalaremos negocios de abastecimiento directo. Lo hacemos sin apenas plata, quien trabaje ahí será a cambio de un pequeño recurso y de alimentos, pero en esta primera etapa tenemos 1000 familias que van a recuperar así su economía». Para la organización esto son trincheras que, en un momento determinado, pueden activar y usar como canales de abastecimiento de medicinas o alimentos, una estructura que el año pasado no tenían y echaron de menos. «Lo vamos a sacar adelante; de eso no hay duda y sabemos cómo hacerlo».

Las redes que mantienen, como la Vía Campesina y algunas alianzas con organizaciones europeas, les han ofrecido difusión y protagonismo en espacios de diálogo internacional. Este reconocimiento honra a quienes se quedaron en el camino y da más fuerza al Movimiento Campesino para seguir adelante. «No hay organización popular en el mundo que haya enfrentado así la crisis, así presentaron nuestra experiencia».

Revista SABC

Serlinda Vigara Mas y Álvaro Monsó Gil

LOS GRUPOS DE CONSUMO ANTE LA CRISIS DE LA COVID-19

Los grupos de consumo, ejemplos de soberanía alimentaria que se articulan en las grietas del sistema, también han sufrido la crisis del coronavirus. En La Ecomarca, una red de grupos de consumo con más de una veintena de puntos de distribución en la Comunidad de Madrid, hemos detectado una serie de retos —y soluciones— para abordar de manera colectiva este 2021 y seguir alimentando el cambio de paradigma alimentario.

Los primeros retos a los que nos enfrentamos los grupos de consumo cuando comenzó la pandemia fueron puramente logísticos: primero, la caída de las infraestructuras que sostienen nuestros repartos y después los movimientos migratorios dentro de las propias ciudades, ya que la crisis económica expulsa a la gente de sus barrios y esto afecta a las estructuras del propio grupo.

Cuando dejamos de reparar en lo logístico y volvemos al cuerpo, nos hemos encontrado en multitud de ocasiones completamente paralizadas. La incertidumbre que provocaron las medidas de restricción de la movilidad activó el ingenio colectivo. Pero ¿qué podemos hacer para que estas organizaciones se sobrepongan a este varapalo social y emerjan fortalecidas como estructuras que sostienen no solo un modelo de consumo sostenible para el planeta, sino una herramienta vital para cuidarnos las unas a las otras?

Sin infraestructuras no hay grupos

En estos meses un número importante de grupos de consumo se quedaron sin espacio para organizar sus repartos. Por un lado, muchos de los

> La recogida de las cestas es un acto político radical y transformador, una rebeldía que pone los cuidados en el centro.

bares, restaurantes y locales que hospedaban los repartos o bien han desaparecido, o bien cuentan con un margen de negocio tan ínfimo que no pueden permitirse ceder sus espacios en horario comercial o, incluso, fuera de él. Las limitaciones de aforo han supuesto una complicación añadida y, aunque los grupos se han organizado para escalonar los repartos con todas las medidas de protección exigidas, han impuesto otra barrera más a la continuidad en negocios hosteleros.

Por otro lado, vivimos una auténtica ofensiva contra los Centros Sociales Autogestionados, que son aliados naturales de los grupos de consumo y que casi sin excepción han proporcionado espacios gratuitos para grupos cercanos. La pandemia ha sido la excusa para una ofensiva política destinada a desarticular centros sociales y espacios vecinales. Aprovechando la psicosis social, por poner un ejemplo, solo en Madrid se ha tolerado el desalojo de La Dragona, La Gasolinera, La Salamandra, La Ingobernable, el Ateneo Libertario de Vallekas, o más recientemente, el Espacio Vecinal de Arganzuela (EVA) o el Solar Maravillas, este último también como pequeño mercado de productoras.

Ante este páramo, a menudo se han planteado opciones alternativas como el alquiler de espacios —si bien la mayoría de los grupos de consumo ya pagan un alquiler, aunque sea simbólico, a los locales que les hospedan—, pero en demasiadas ocasiones estas opciones se confrontan con la lógica cooperativa y contraria a la gentrificación de los proyectos, o bien simplemente hacen económicamente inviable su continuidad.

En La Ecomarca hemos encontrado infraestructuras alternativas en medio de la crisis. Cada espacio cerrado ha supuesto la apertura de otro gracias a la creatividad y la cooperación. Repartos en patios de casas, flexibilización de horarios en los negocios que nos apoyan para la recogida de cestas, usos de locales en los barrios que no tienen nada que ver con la alimentación…; pero, por encima de todo, recordar que la recogida de las cestas es un acto político radical y transformador, una rebeldía que pone los cuidados en el centro, en un contexto en el que los espacios de intercambio social son más necesarios que nunca y funcionan como una auténtica vacuna contra la soledad y el apoyo vecinal.

La crisis habitacional también es la crisis de las redes vecinales

Algunas plataformas, como el Sindicato de Inquilinas y la PAH, han denunciado de forma sostenida la imparable subida en los precios de los alquileres, que solo entre 2015 y 2019 tuvieron un incremento de hasta el 50 %. Como consecuencia, la crisis habitacional se ha ido agudizando, expulsando de los barrios a las vecinas y agravando la lacra social de los desahucios, en su gran mayoría ejecutados por grandes tenedores de vivienda (bancos y fondos buitre). Mientras tanto, los poderes públicos no solo han ignorado sistemáticamente las iniciativas para regular los precios del alquiler, sino que de forma obscena han llegado a lavarse las manos, afirmando que los desahucios se habían detenido cuando se calcula que, hoy en día, aún siguen habiendo unos 200 al día.

¿Cómo afecta la crisis habitacional a los grupos de consumo? Con cada barrio gentrificado, con cada desahucio ejecutado, con cada vecina expulsada de su casa, las redes de apoyo y el tejido asociativo se van marchitando lentamente. Los grupos de consumo han sufrido tanto el sobrecoste de los alquileres que la participación se ha dificultado en ocasiones por razones puramente económicas, como la propia dispersión geográfica de sus miembros, producto de la expulsión paulatina hacia las periferias. De manera paralela, ha ocurrido el fenómeno contrario: un aumento de la estabilidad en pueblos pequeños y las zonas periféricas de las ciudades, zonas menos afectadas por la crisis habitacional (por ahora).

La causalidad opera al menos de dos formas diferentes: las vecinas individualmente requieren de redes de apoyo sólidas y asentadas para involucrarse en iniciativas como los grupos de consumo, mientras que los grupos de consumo como colectivo requieren de un tejido vecinal fuertemente politizado para mantener el ímpetu, la organización y la coordinación necesarias para prosperar. El hecho de que los grupos de consumo, y en general las redes de apoyo vecinal, sean una fuente de resistencia frente a las lógicas de la gentrificación y la burbuja especuladora genera una pescadilla que se muerde la cola: a mayor subida de alquileres, mayor cantidad de vecinas expulsadas de sus barrios, mayores dificultades para la organización y coordinación de los grupos, mayor debilitamiento de las redes de apoyo, menor oposición a las dinámicas de gentrificación y, en última instancia, más facilidad para continuar con la especulación de la vivienda.

Los grupos de consumo deben formar parte activa de las iniciativas por la regulación de los alquileres y exigir un decreto frente a los desahucios que sea real, que no compense a especuladores ni imponga criterios de vulnerabilidad excesivamente estrictos. Muchas de las personas que forman parte de los grupos de consumo militan también en movimientos vecinales por la vivienda y sus respectivos sindicatos. No entendemos la separación de luchas en la ciudad. Lo agroecológico y la defensa del territorio son resistencias que van entrelazadas.

En el plano económico, creemos que se pueden explorar vías de flexibilización de las condiciones económicas de participación (pago de alquileres, tasas, etc.) cuando las personas que forman parte del grupo de consumo lo necesiten.

El miedo paralizante

En un contexto en que la salud mental de la población se ha visto igual de amenazada que la salud física, acciones tan cotidianas como recoger una cesta de verduras se han llegado a convertir en verdaderos ejercicios de superación personal. El miedo a las aglomeraciones, las restricciones a la movilidad o la necesidad de seguir estrictos protocolos sanitarios son solo algunos de los factores que, en lo psicosocial, han hecho mella en la normalidad de los grupos de consumo.

La omnipresencia de discursos que criminalizan comportamientos individuales por encima de la inacción institucional ha afectado a las redes de provisión de alimentos autogestionadas. En estos espacios *informales*, se ha llegado a generar una sensación artificial de inseguridad en comparación con espacios más *institucionalizados*, como los supermercados, donde toda una parafernalia

Repartos de verduras de la Ecomarca. Foto: La Ecomarca

comunicativa y una maquinaria propagandística se ha dedicado aplacar estos miedos.

El resultado es bastante claro: en el caso de los grupos cuyas cestas no tienen una periodicidad obligatoria o mínima, en muchos casos se ha reducido la frecuencia de los pedidos. En los que funcionan mediante cestas fijas, estos miedos han podido desembocar en el completo abandono del grupo. En La Ecomarca, dos grupos han cerrado definitivamente y dos de forma temporal por estas razones desde marzo del 2020. Por esto, creemos que habilitar espacios en el seno de los grupos para abordar asuntos de salud mental y apoyo mutuo se torna fundamental.

> Los grupos de consumo deben formar parte activa de las iniciativas por la regulación de los alquileres y exigir un decreto frente a los desahucios que sea real.

Los grupos de consumo del medio rural

REVISTA SABC

«En nuestro caso, y creo que ha sido bastante generalizado en el medio rural» —nos explica Paul Nicholson—, «la pandemia y el confinamiento han fortalecido la acción y resistencia que significa un grupo de consumo». En Lekeito, el grupo de consumo Amaren, al que pertenece Paul junto a sesenta y cinco familias, mantiene desde hace doce años un pequeño local donde adquirir todo tipo de productos agroecológicos y mayoritariamente muy cercanos.

«Lo que la pandemia descubrió fue la fragilidad del sistema alimentario globalizado. Mientras, nosotras tuvimos la capacidad de mantener siempre abierto el local, con alimentos frescos de todo tipo, con precios similares o a veces más baratos que en establecimientos convencionales. Y la gente lo valoró. En realidad» —continua Paul—, «no solo pudimos mantener la actividad, sino que hemos agrandado el círculo de familias y el de productoras con las que trabajamos». Es cierto que tuvieron que adaptarse a la nueva situación y hacer algunos cambios, pero la flexibilidad de la autogestión que caracteriza estos colectivos y las redes de contactos fueron fundamentales. Fueron capaces también de canalizar la producción destinada a los comedores escolares cerrados y de apoyar iniciativas que surgían del campesinado para favorecer la venta directa de sus alimentos. «Como resultado» —afirma Paul—, «nos consta que personas campesinas han dado el paso a la agroecología, porque hemos demostrado resiliencia».

Otra cuestión sobre la que Paul advierte particularidades en lo rural: «El tema de los controles de movilidad, como nunca nos preocupó, nunca nos frenó. Teníamos claro que nuestra actividad es esencial».

Militancia verde en tiempos de crisis

La precarización nos transporta a un marco psicosocial en el que muchas personas se ven obligadas a reorientar sus energías. Es decir, a elegir entre el sostenimiento mental y económico o la militancia ecosocial. El movimiento ecologista se ha tenido que enfrentar prácticamente desde sus inicios a un fenómeno complejo: la falta de prioridad de una lucha percibida como a largo plazo, intangible o etérea, cuando la precarización de la vida impone sus propias urgencias. Los grupos de consumo requieren un esfuerzo económico y mental por parte de sus miembros; y, en parte, la misión de los grupos de consumo es recordar que esta elección es una dicotomía falsa, que este tipo de intercambios crean comunidades orgánicas en las que las personas se pueden dejar caer porque otras las sostendrán, en las que se pueden poner sobre la mesa, además de verduras de temporada, todos los miedos, incertidumbres y precariedades para repartir el peso. A pesar de dichos malestares, más de la mitad de los grupos de consumo de La Ecomarca han aumentado los pedidos: han sentido que es la forma más segura y organizada de poder acceder a su alimento.

Los grupos de consumo se enfrentan a un horizonte que, si bien es incierto, también puede ser propicio para reivindicar la absoluta vigencia de sus principios. Ante un sistema al que se le ven las costuras, urge articular un discurso sólido que les visibilice y sitúe como herramientas de resistencia y resiliencia ante el colapso social. El reto es, probablemente, salir de esta atomización que nos asola, desde la conciencia de los nuevos retos, y comprender el rol político y social que los grupos tienen para el fortalecimiento de las redes vecinales, la salud comunitaria y el sostenimiento del derecho a la ciudad. Esta visión holística debe llevarnos mucho más allá de nuestras cestas semanales, hacia un modelo con la aspiración de trascender las fronteras del barrio, tan inclusivo y acogedor como ambicioso y combativo. No quedan muchas más opciones.

Serlinda Vigara Mas
Responsable de comunicación de La Ecomarca

Álvaro Monsó Gil
Activista y miembro de La Ecomarca

Laura Arroyo

LAS POLÍTICAS DE LO COMÚN RESURGEN Y RESISTEN

RESEÑA DEL LIBRO *REENCANTAR EL MUNDO. EL FEMINISMO Y LA POLÍTICA DE LOS COMUNES* DE SILVIA FEDERICI, TRAFICANTES DE SUEÑOS, 2019

Es diciembre del 2020. Llevamos un año durísimo a las espaldas. Llega a mis manos un regalo. Una invitación a asomarme a un tema que me apasiona: los comunes. Creo que, en la práctica, he estado relacionada con él toda la vida y, en lo teórico, de manera más reciente. Tiene forma de libro y su título y célebre autora encienden mi deseo de desconectar de la pantalla y agarrarlo vorazmente sentadita al lado de la lumbre: ¡¡reencantar + feminismo + comunes!! Pienso aprovechar mis vacaciones para zambullirme en él.

Abro el mapa en que, generosa y cuidadosamente, un colectivo que se empeña en facilitar el conocimiento al común, ha recopilado y traducido las investigaciones de una mujer que ha recorrido el mundo y la historia para comprender y promover la defensa de los comunes… Su prólogo, con referencias a *El paraíso perdido* de Milton (1667), hace resonar en mi corazón la versión musicada del poema («Red Right Hand», Nick Cave and The Bad Seeds) y me trae a la mente algunas de las imágenes de una serie que mis adolescentes adoran. Barrunto dolor en la lectura, pero el título y la introducción me convencen de que las esperanzas aparecerán en el sendero:

> *Dedicar un libro a la política de los comunes se puede interpretar como una muestra de ingenuidad ahora que las guerras nos rodean, la crisis económica y ecológica devasta regiones enteras y resurge el supremacismo blanco, el neonazismo y las organizaciones paramilitares, que actualmente operan con impunidad. […] Entre tanta destrucción, está creciendo otro mundo, […] el lenguaje y la política de los comunes constituyen hoy la expresión de ese mundo alternativo […] se ha asumido que la vida no tiene sentido en un mundo hobbesiano, en el que cada persona compite con todas las demás, y la prosperidad se alcanza a expensas de otras personas, y que así nos dirigimos hacia el fracaso asegurado.*

Primera parte: los cercamientos

En esta primera sección del mapa, Federici nos hace viajar por los últimos cinco siglos de la historia de la humanidad, por todas las geografías, para comprender cómo han evolucionado las formas de cercamiento y desposesión en el mundo globalizado que habitamos para garantizar que

la banca siga ganando, desmovilizando las posibles resistencias de las personas trabajadoras mediante estrategias de división interna y desarraigo, con unas consecuencias brutales para la vida. La investigación es tan exhaustiva que no paro de señalar páginas, subrayar y anotar referencias para ampliar mis lecturas. Porque mirar de cerca la «cooperación al desarrollo» de la era poscolonialista y las políticas de las grandes organizaciones internacionales (Banco Mundial, Organización de las Naciones Unidas, etc.), sus estrategias «suaves» —y no tan suaves—, basadas en la desposesión de las tierras comunales y la generalización de la deuda, me pone *la carne del alma de gallina* y me pide cargarme de armas para contrarrestar la invisibilización y los *pink-green-purple washes* cotidianos que nos sitúan en la caverna, lejos de la responsabilidad, en una especie de ficción de naciones desarrolladas que no nos permite ver que la desposesión, el desarraigo, es aquí, es ahora, es también. Este mismo viaje nos aproxima a múltiples formas comunitarias, lideradas y sostenidas principalmente por mujeres, que son ejemplos claros de que las políticas de lo común resurgen y resisten y se nos ocultan para evitar que percibamos que el peligro propio puede afrontarse en común y para impedir que se nos despierten las ganas de tomar partido y salir juntas de la impotencia y el vacío que nos hace seguir deseando «una vuelta a la normalidad».

Segunda parte: sobre los comunes

Ha llegado enero, y no, la vuelta a la normalidad no ha llegado con las campanadas. El ánimo general es gris, mucho… Afrontamos cada día con pérdidas de vidas, servicios públicos deficientes o inexistentes, efectos climáticos devastadores, cierres echados, estructuras instructivas en *shock*, casas sin gente y gente sin casas, sin luz, sin agua… Son las consecuencias de siglos de una economía que obviaba la VIDA (como el propio Marx), de confianza ciega en la tecnología, de barra libre a la mercantilización de todo, de posibilismos, de meritocracias, de extracción sin límites… ¡Se acabó la fiesta! Me asomo a esta parte del libro cargada de esperanza: toca alumbrar un mundo nuevo. Esa nueva normalidad que muchas quisimos atisbar en los primeros momentos de la pandemia: tiempos para «estar con los míos» con calidad, conocer a mi vecindario, organizarme con la gente del barrio para que nadie se quede sin comer, poner tiestos, plantar huertos, cocinar

> Es necesario desvelar que, bajo el paraguas del procomún a veces se sostienen privilegios de unas pocas a costa de exclusiones de otras.

con calma los alimentos, comprar en el pequeño comercio, sabernos vulnerables e interdependientes, decelerar, volver al pueblo…

En esta parte del mapa, la autora nos muestra formas comunitarias de organización ya existentes a lo ancho y largo del planeta, donde, desde una reconstrucción feminista, la reproducción social no solo de las necesidades vitales, sino también de la construcción de la identidad y sentido de pertenencia, está en el centro. Pero si lo que se espera al acercarse a esta parte, es una presentación idealizada de estas formas, el chasco será tremendo. De hecho, es incisiva, cruel incluso con algunos análisis, porque es necesario desvelar que, bajo el paraguas del procomún a veces se sostienen privilegios de unas pocas a costa de exclusiones de otras. Lo interesante aquí es tomar nota de los principios que han sido básicos para las buenas praxis, así como de los retos que enfrentan las existentes y los falsos mitos sobre los que se construyen algunas nuevas. Quizá así aprehendamos su potencial para la subsistencia y reforcemos esa transformación imprescindible de nuestra subjetividad, cincelada a golpe de martillo durante siglos para desconfiar del mundo, del otro, de nuestra capacidad para el bien vivir…, esa que, en estos meses, en este rincón del mundo, parecía renacer en los balcones.

No nos descuidemos…, ya estamos viendo que no lo van a poner fácil.

«Necesitamos superar el estado de negación constante y de irresponsabilidad en relación con las consecuencias de nuestras acciones. […] De hecho, si el «bien común» tiene algún sentido, este debe ser la producción de un nosotros mismos como sujeto común».

Laura Arroyo

Área de comunales de la Fundación Entretantos

LA FUENTE *Un lugar de encuentro para pobladoras*

Presentación de las organizaciones que conforman esta revista

Red Agroecológica de Lavapiés

La Red Agroecológica de Lavapiés (RAL) está formada principalmente por grupos de consumo y cooperativas mixtas de producción y consumo autogestionados y que tienen el barrio de Lavapiés (Madrid) y alrededores como espacio de referencia.

Entre las principales actividades que promovemos, se encuentran cada mes de mayo las Jornadas Agroecológicas de Lavapiés, con feria de productores, charlas, debates, talleres, proyecciones documentales, conciertos, comidas populares, etc. Además, organizamos encuentros y talleres de formación entre grupos y cooperativas de consumo, eventos de presentación de nuevos proyectos agroecológicos en el barrio y visitas a nuestras productoras. Hemos creado una entidad, Mercapiés, para organizar pedidos colectivos de determinados productos. Colaboramos en el desarrollo de sistemas de certificación participativa y participamos en la plataforma Madrid Agroecológico, que organiza, entre otras cosas, la Semana de Lucha Campesina.

Con una trayectoria de más de 14 años y una frecuencia mensual de asambleas, la RAL es un espacio dinámico y abierto a la participación de todos aquellos colectivos y personas que se interesen por las iniciativas relacionadas con la soberanía alimentaria y la agroecología.

redagrolavapies.blogspot.com

Sindicato Labrego Galego

Somos una organización campesina con casi medio siglo de historia y, desde los inicios, en clandestinidad —como Comisións Labregas—, o durante la convulsa transición cuando se nos legalizó, nuestras luchas han estado siempre vinculadas a la soberanía alimentaria, aunque por aquel entonces no la llamásemos así. Pero era soberanía alimentaria lo que demandábamos, bien al defender la tierra para producir alimentos en conflictos como el de Encrobas o bien al reclamar el derecho a producir, como cuando la CEE aplicó unas cuotas injustas a nuestra capacidad para producir leche e incluso al enarbolar la bandera del feminismo y la igualdad, pues exigiendo los mismos derechos para las campesinas, protegemos su función insustituible como custodias del territorio, de las semillas y de las personas que contra viento y marea seguimos obcecadas en mantener vivo el rural.

Hoy en día, articulada ya globalmente en el seno de La Vía Campesina, la soberanía alimentaria es para el SLG una reivindicación central e irrenunciable, pues sin ella no se entiende todo aquello que defendemos: nuestro derecho como pueblo a alimentarnos a través de sistemas agrarios sostenibles basados en la agroecología, mantenidos de manera solidaria por campesinos y campesinas, porque no producimos solo para nosotros y nosotras, sino que sembramos para que las generaciones futuras sean dueñas y soberanas de su alimentación.

sindicatolabrego.com

PALABRA DE CAMPO

Castilla: Territorio para el éxodo

Abrigaño

Escrutar el término *soberanía*, en pleno siglo XXI, con una modernidad consumada sin apelación, parece un reto restringido al campo de la retórica. El sistema-mundo desplegado por Immanuel Wallerstein, una globalización fragmentada que impulsa bloques en desigual grado de desarrollo, queda muy lejos de la imagen impostada de la *aldea global*. Con un capitalismo en crisis permanente, que remodela los paisajes por medio de procesos de desposesión y desecha a las poblaciones abandonándolas sin ninguna capacidad de agenciamiento, parece que las viejas aspiraciones de emancipación andan moribundas como las propias representaciones culturales de esta época póstuma, como la define la filósofa Marina Garcés: zombis, catástrofes, distopías…

Y es precisamente en ese *después* acontecido (*póstumo*: lo que hay después de la muerte) tras la caída de las certezas que alumbraban el firmamento de esta civilización decadente —progreso, razón, mercado…— y también de sus réplicas, siempre inmanentes, cuando se revela más urgente que nunca indagar en otras lógicas, otros paradigmas, otras cosmovisiones, que nos iluminen en el *interregno* que se abre ante nuestros pies. De un tiempo que marcha a paso firme solo mirando hacia delante a otro que, como el ángel de Walter Benjamin, gira la cabeza hacia atrás: pero en esta ocasión para hurgar en el pasado en busca de utillaje de supervivencia con el que afrontar el futuro; de un espacio arrasado y reducido a la dimensión plana de la economía, a lugares que habitar desde diferentes realidades culturales.

Así, se puede formular *lo castellano* como un contenido que no cabe en las categorías que arman la actual dominación, que mantiene una fuga de la jaula que conforman: el sentido comunal, *comunero*, que liga muchas de sus formas de expresión (relaciones sociales, saberes, prácticas, medios de producción…). En un contexto de metrópolis difusa, que se sucede sin discontinuidad de la colonia, descolonizar Castilla significa, más que recuperar esencias que exhibir en las estanterías del multiculturalismo integrado, crear un marco de interpretación propio donde sea esta manera de ser comunidad la que cobre vida. Un territorio, al abrigo de las inclemencias que se ciernen sobre precarias existencias, en el que planear un éxodo.

Si el territorio es el espacio que toma conciencia de sí mimo, defenderlo es dejar que emerja su historia, sus instituciones, sus tradiciones…, pero no de manera fetichista, sino todo lo contrario, con la misma crítica que nos ayuda a desvelar lo falso de esta realidad. Hay otra concepción de soberanía, que incumbe también a la alimentaria, en este giro: aquella que da cuenta de la inversión de un mundo en el que es la mercancía quien nos gobierna; en el que es el *intercambio* el que sustituye el diálogo entre las personas por la aritmética de las cosas. Dotar a la soberanía de un carácter comunitario pasa por articular las luchas que van desde abajo, contra y más allá de ese *money makes the world go round*. En último término, algo de lo que no debería haber traducción al castellano.

Abrigaño

Grupo de Estudios Castellanos
abrigano.com

PARA HACER POSIBLE ESTA REVISTA, TE NECESITAMOS

Para pensarla y llenarla de contenidos; para abrir debates; para conocer y conectar iniciativas, colectivos y experiencias; para darle forma y color; para ponerla en rutas y caminos hasta tus manos... En definitiva, para que evolucione y se mantenga viva, necesitamos tu apoyo.

Una forma de colaborar es mediante una suscripción anual mínima de 35 € a cambio de la revista en papel. Además, te enviaremos de regalo un número de la hemeroteca. ¡Elige cuál te apetece leer! Pero hay más formas de apoyar este proyecto:

RIEGO

Aportación puntual desde 5 €

SEMILLA

Suscripción en papel. Recibe los próximos 4 números a partir de 35 € al año
Sólo envíos en el Estado español

RAÍZ

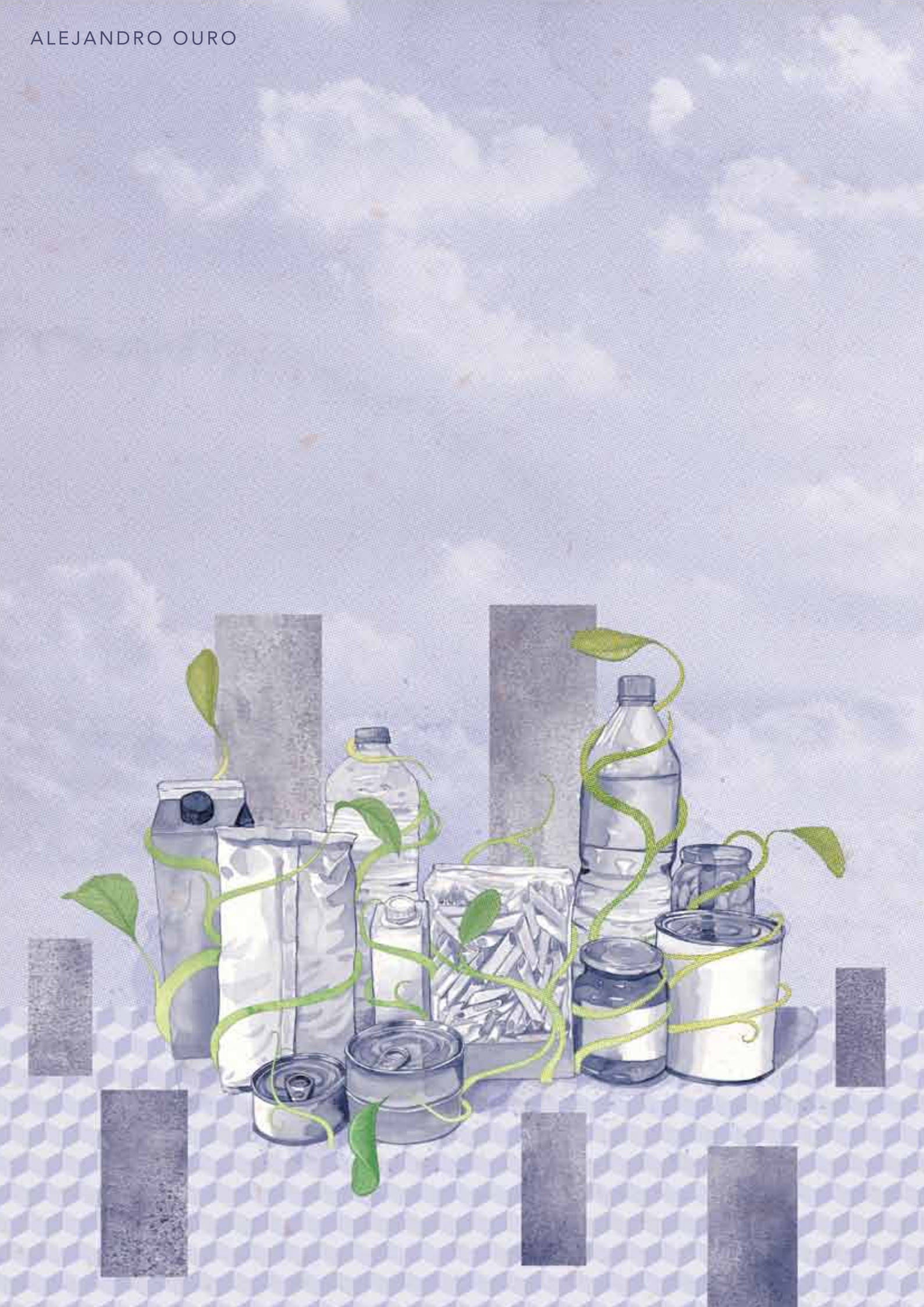
Hazte socia/o. Desde 50 € al año, recibe la revista en papel, accede a ofertas, participa en las asambleas y colabora en las decisiones del proyecto

Puedes hacer todo el proceso online a través de la web:
www.soberaniaalimentaria.info/colabora/suscripcion

Para resolver cualquier duda sobre el proceso de suscripción, escríbenos a
suscripciones@soberaniaalimentaria.info

¡Muchas gracias!

REGALA LA REVISTA

www.soberaniaalimentaria.info/regala

ALEJANDRO OURO